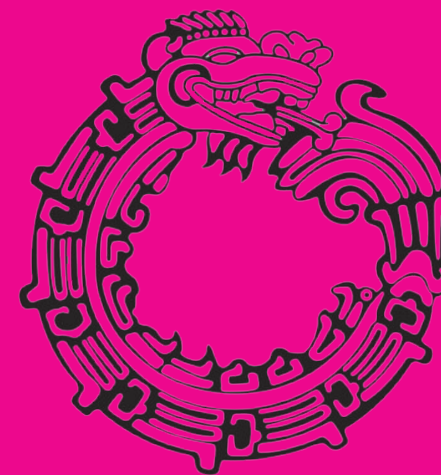


Si nos limitamos a la información del Instituto Nacional Electoral, sabremos que Morena obtuvo su registro el 9 de julio de 2014 y que en 2015 tuvo su primera participación electoral, en la que se posicionó como la cuarta fuerza política del país. Sin embargo, ello no aclara gran cosa. Mientras los partidos nuevos en México luchan por conservar el registro, Morena en su debut fue mucho más allá: logró convertirse en primera fuerza electoral en la Ciudad de México, fue competitivo en nueve entidades federativas y se posicionó con cierta soltura a nivel nacional, a excepción de tres estados de la República. Ese año, Morena no solo sobrevivió a la prueba de las urnas sino que logró ubicarse de golpe como un “partido grande” en casi todo el país. ¿Qué hizo de Morena una organización con tal fuerza en su aparición?

La explicación recae en que el partido obtuvo su registro en 2014, pero sus raíces datan de tiempo atrás, pues el núcleo social que lo fundó había ejercido un activismo político más o menos organizado y desplegando una presencia territorial con cierta estabilidad y amplitud, al menos desde una década antes, de cara a diversas coyuntura políticas, tales como la elección de 2012, la crítica a las alianzas PAN-PRD en 2010, la elección intermedia de 2009, la fallida reforma energética de Felipe Calderón en 2008, la controvertida elección de 2006 y el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, personaje que destacó a través de dichos episodios como un actor central.

EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

Héctor Alejandro Quintanar Pérez



ILUSTRACIONES DE
RAFAEL BARAJAS, *EL FISGÓN*

PRÓLOGO DE
TATIANA CLOUTHIER

Esta es una publicación de la Secretaría de Educación,
Capacitación y Formación Política.
Comité Ejecutivo Estatal, Morena Ciudad de México.
Distribución gratuita.

Secretaría Estatal FORMACIÓN POLÍTICA
morena CIUDAD DE MÉXICO







EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO
DE REGENERACIÓN NACIONAL





*El origen del Movimiento
de Regeneración Nacional*

Primera edición, octubre de 2019

D.R. © 2019 Morena
www.morena.si

CORRECCIÓN DE ESTILO: Juan Barrera Cordero
DISEÑO Y FORMACIÓN: Raúl Marcó del Pont Lalli





ACTUALIDAD DE MÉXICO:
LECTURAS POLÍTICAS

4

EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

HÉCTOR ALEJANDRO QUINTANAR PÉREZ



ILUSTRACIONES DE RAFAEL BARAJAS,
El Fisgón

PRÓLOGO DE TATIANA CLOUTHIER



Secretaría Estatal FORMACIÓN POLÍTICA

morena CIUDAD DE MÉXICO





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN POLÍTICA
Comité Ejecutivo Estatal, Morena Ciudad de México

Jesús Remberto Rodríguez Jiménez	<i>Secretario</i>
Héctor Aguilar Silva	<i>Integrante</i>
Juan Barrera Cordero	<i>Integrante</i>
Miguel Franco González	<i>Integrante</i>
Lorena Mardesiche Islas	<i>Integrante</i>
María Camelia Rétiz Peralta	<i>Integrante</i>
Luis Enrique Quezada Rodríguez	<i>Integrante</i>
Miguel Eduardo Rueda Aguirre	<i>Integrante</i>





ÍNDICE

- 9 ♦ **PRESENTACIÓN**
- 13 ♦ **PRÓLOGO. GÉNESIS E IDEARIO DE UN PARTIDO CON
VOCACIÓN DE SERVICIO**
Tatiana Clouthier Carrillo
- 11 ♦ **UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO**
- 19 ♦ **INTRODUCCIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SURGEN DE
LA NADA**
- 22 ♦ **LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAPITAL POLÍTICO: ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR ANTES DEL DESAFUERO**
- 30 ♦ **DESDE LA OPOSICIÓN: DEL PRD A LA JEFATURA DE
GOBIERNO**
- 36 ♦ **LA ALTERNANCIA EN EL PAÍS Y LA CONSOLIDACIÓN
PERREDISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO**
- 37 ♦ **EL PREÁMBULO DEL CONFLICTO DEL DESAFUERO**
- 40 ♦ **EL DESAFUERO DE AMLO: “LA GOTA QUE DERRAMÓ EL
VASO”**
- 51 ♦ **LA RESACA DEL DESAFUERO: LA ELECCIÓN DE 2006**





- 56 ♦ **LA RESISTENCIA POSELECTORAL**
- 58 ♦ **LA CONVENCION NACIONAL DEMOCRÁTICA Y EL GOBIERNO LEGÍTIMO: VÍAS PARA SUPERAR LA ESPONTANEIDAD**
- 59 ♦ **HACIA LA FORMALIZACIÓN DE LA PRESENCIA TERRITORIAL**
- 61 ♦ **EL MOVIMIENTO LIDERADO POR AMLO, UN PARTIDO SIN REGISTRO QUE HIZO FRENTE AL SEXENIO DE CALDERÓN**
- 70 ♦ **LA FRACTURA PERREDISTA: CONFLICTO DE 2008, ELECCIONES DE 2009 Y LAS ALIANZAS PAN-PRD**
- 78 ♦ **EL NACIMIENTO DE MORENA COMO ASOCIACIÓN CIVIL Y LA PRESENCIA TERRITORIAL DE CARA A 2012**
- 85 ♦ **MORENA Y EL 2012: EL CAMINO PARA CONVERTIRSE EN PARTIDO POLÍTICO**
- 89 ♦ **LAS POSTRIMERÍAS DE 2012, LA FUERZA DE MORENA, EL PACTO POR MÉXICO Y LA CONSOLIDACIÓN PARTIDISTA**
- 94 ♦ **CONCLUSIONES: LA RAÍZ FUNDACIONAL DE MORENA**
- 97 ♦ **SEMBLANZA: HÉCTOR ALEJANDRO QUINTANAR**





PRESENTACIÓN

En tanto partido político de reciente creación, morena tiene entre sus objetivos fundamentales fortalecer la cultura política y la participación responsable de su militancia, simpatizantes y la población en general.

Esta participación no debe limitarse al involucramiento de la gente en las actividades del partido. Por el contrario, debe guiarse por lineamientos claros: basarse en información veraz, suficiente y actualizada; traducirse en quehacer organizativo y en servicio a la comunidad; no condicionar la participación a una remuneración monetaria u otro beneficio económico; no comprometer el sentido del voto; etcétera.

Para este fin, el partido realiza, a través de sus órganos estatutarios diversas actividades de formación política, de conformidad con la normatividad aplicable.

Por esta razón, como parte de su programa de trabajo anual 2017, la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Estatal de morena Ciudad de México organizó el “Segundo Taller Estatal de Formación Política”, dirigido a los titulares y cuadros encargados de la formación política en los comités ejecutivos delegacionales.

El taller se realizó en doce sesiones, divididas en tres módulos. En cada una de las sesiones, un especialista reconocido hizo una exposición inicial del tema elegido, aportando su visión como investigador, militante o activista. A continuación, se abrió la participación para que los asistentes realizaran cuestionamientos o aportaciones adicionales sobre el particular. De este formato, derivó una dinámica interactiva y una pluralidad de perspectivas sobre el asunto en cuestión.

Como parte del proceso de construcción de la memoria organizativa del partido y con vistas a su ulterior difusión, las sesiones fueron filmadas, transcritas y editadas, de conformidad con los expositores. Resultado de este esfuer-





zo es la serie de folletos titulada “*Actualidad de México: lecturas políticas*”, cuyo cuarto volumen ponemos hoy, lector, en tus manos.

Si bien el maestro Héctor Quintanar Pérez no participó originalmente en el Segundo Taller Estatal de Formación Política, consideramos que en este otoño de 2019, al inicio del proceso de renovación de dirigencias de nuestro partido, resulta oportuno publicar una síntesis de su trabajo de investigación que recrea e interpreta el apasionante y complejo período de construcción del Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo origen, ideario y objetivos son la clave más confiable para la recta conducción jurídica, ética y política de este proceso.

Al incluir este trabajo de divulgación en la serie “*Actualidad de México: lecturas políticas*”, junto a las conferencias de otros politólogos e investigadores, reiteramos nuestro propósito de difundir temas relevantes y de coyuntura entre nuestra militancia, para enriquecer su acervo de conocimientos y fortalecer la conciencia de su responsabilidad frente a los retos de la Cuarta Transformación.

El tiraje es de 2000 ejemplares, y su distribución se hará en forma gratuita entre la militancia y los asistentes a los diversos eventos que organiza la Secretaría.

El secretario

Ing. Jesús Remberto Rodríguez Jiménez





EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO

Este texto de divulgación está basado en una investigación académica de mi autoría publicada como libro en 2017 por la editorial Ítaca, titulada *Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional*. En diversas presentaciones de dicha obra, importantes voces mexicanas –provenientes de la vida intelectual y política de nuestro país–, para mi enorme fortuna y agradecimiento, señalaron el valor documental de ese trabajo que, pese a su origen académico, trató siempre de ser un libro cuya redacción sencilla fuera dirigida no solo a especialistas sino al público en general. Empero, en atención a darle mayor alcance a los hallazgos de esta investigación, diversos presentadores me instaron a redactar una versión sintetizada, tipo “cuadernillo”, debido a la importancia que Morena tenía ya como fuerza política debutante y como fenómeno histórico. Este documento busca abonar a esa difusión.

A todos los presentadores, que con su colaboración han contribuido a mejorar este trabajo académico (y que también, con su amabilidad, me han otorgado un grato ejemplo humano) mi agradecimiento siempre, mi admiración y respeto: Luis Javier Garrido (q.e.p.d), Luis Gómez Sánchez, Lorenzo Meyer Cossío, Angélica Cuéllar Vázquez, Miguel Armando López Leyva, Carlos Ímaz Gispert, Jesús Ramírez Cuevas, Luisa Alcalde Luján, Carola García Calderón, Leonardo Figueiras Tapia, Alejandro Solalinde Guerra, Guadalupe Hernández Correa, Modesta Fuentes, José Filiberto Velázquez, Miguel Alva y Alva, Gerardo





Fernández Noroña, Jesús Pérez Tagle, Mauricio Adrián Gómez, Christian Samperio, José Agustín Ortiz Pinchetti, John Ackerman, Rodolfo Lara Lagunas, Jesús Romero Alonso, Janio López, Pedro Barrada, Adrián Valenzuela, Gloria Sánchez Hernández, Cuitláhuac García Jiménez.

Hago mención especial de Enrique Calderón Alzati, Irma Eréndira Sandoval, Pedro Salmerón y Claudia Sheinbaum, quienes desde su espacio intelectual se tomaron el tiempo para presentar mi investigación, y explícitamente me instaron a la redacción de este cuadernillo y brindaron su generoso apoyo a esa labor. Agradecer la amabilidad, el tiempo y la disposición que brindaron a mi trabajo no era suficiente, de ahí que con orgullo incluya sus recomendaciones para este y futuros proyectos académicos. Así mismo, hago una mención especial al maestro Rafael Barajas Durán, *El Fisgón*, gran caricaturista e historiador mexicano, quien, con sus extraordinarias ilustraciones, es coautor gráfico de este libro, y del mismo modo extendiendo un agradecimiento profundo a la maestra Tatiana Clouthier, notable política mexicana y artífice del proceso histórico contemporáneo, por la redacción del prólogo de este texto. Sin ellos, los aciertos y alcances de esta obra no serían posibles. Sin embargo, la responsabilidad de lo aquí expresado (sobre todo en las posibles omisiones, erratas u errores) es mía.





PRÓLOGO
GÉNESIS E IDEARIO DE UN PARTIDO
CON VOCACIÓN DE SERVICIO

Tatiana Clouthier Carrillo

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) –nombre de esta nueva opción partidista que en su debut logró convertirse en primera fuerza electoral en la Ciudad de México– surgió esencialmente de un grupo social apartidista que, poco a poco, fue politizándose al fragor de diversos incidentes de la reciente historia política de México. Un grupo plural en busca de rescatar al México olvidado, que, por diversos motivos, se quedó atrás.

Recordemos que el 9 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó y aprobó el registro de tres nuevos actores que en ese momento subieron a la arena política de México: Morena, Encuentro Social (PES) y el Partido Humanista. Los dos últimos, como es sabido, ya perdieron su registro como partidos políticos nacionales. Sin embargo, el caso de Morena es completamente diferente, pues no solo alcanzó el 9.03% de la votación emitida en las elecciones de diputados federales en 2015, sino que en los comicios celebrados el 1 de julio del 2018 logró convertirse, en tan poco tiempo, en la primera fuerza política del país, obteniendo la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Morena –que en su *Declaración de principios* dice concebir la política como “una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir a México”– ha tenido una insólita acogida entre el electorado, entre otras muchas cosas, porque se propone como “un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan mexicanos de to-





das las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas”.

Lo que podremos encontrar en este libro es la génesis de este movimiento social que surgió de un episodio político muy específico: el proceso de desafuero que el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrentó en 2005, a solicitud de la Procuraduría General de la República del gobierno de Vicente Fox.

Además de la escrupulosa cobertura cronológica y temática sobre el nacimiento de Morena, en esta obra encontramos también un minucioso repaso histórico que, por una parte, se encarga de analizar los antecedentes generales de algunos de los actuales partidos y corrientes políticas mexicanas, y, por otra parte, nos obsequia una travesía que examina la compleja historia que ha tenido la izquierda mexicana.

Uno de los aspectos que en Morena siempre me ha resultado muy interesante es que no se concentra en un solo sector ni enfoca su atención en una clase social en particular. En realidad, se ha empeñado en buscar simpatías en todos los ámbitos de la sociedad; su fortaleza, repito, ha sido la pluralidad.

De ahí que otro de los aspectos más sobresalientes de este libro –a diferencia de los textos que suelen acompañar a los manifiestos y proclamas de casi todos los partidos políticos que actualmente conocemos– es que aquí, para satisfacción de propios y extraños, no nos topamos con una narración directa, histórica y pormenorizada, sino también observamos una investigación crítica y profunda que argumenta con detalles y documenta con noticias periodísticas.

Afortunadamente, y después de muchas décadas de vigorosas luchas democráticas, los partidos políticos están obligados a retomar su lugar como aquello que siempre estuvieron llamados a ser: los conductos fundamentales de la competencia electoral y, al mismo tiempo, los encargados de vigilar que la población mexicana disfrute de un buen sistema de gobernabilidad. A pesar de su mala fama –que, en buena medida, ellos mismos han estimulado con sus abusos y sus transgresiones–, debemos insistir en la necesidad de contar con partidos políticos dignos en México.





Por todo esto, no es descabellado afirmar que este libro es una obra necesaria, para poder entender no solo la génesis de un partido político, sino también una bitácora que nos ayudará a comprender una etapa de gran importancia para la historia reciente de México.







*A Mariela Cid, Mario Andrade, Martha Alicia Ramos,
Arturo Sánchez Cortés; Tomás Trujillo, Lenin,
Yolotzin, Guadalupe, María Sofía Larios, Mónica Deyanira,
Raymundo Escobedo, Gabriel Juárez, Yolanda Ahuja,
Vivian Bautista, Arturo Sánchez Morales, Óscar Colina.
Ciudadanos de tiempo completo, valientes y nobles,
cuyo esfuerzo es referente moral para todos.*

*A mis arquitectos biográficos: Fernanda, Jorge,
Abraham, Jona, Maru, Male, Caro, Beto, Alonso, Daniel, Beti,
Alejandro, Alejandro P., Paco, Edwin, Adrián, Aldo, Yaz,
Miguel, Abraham, Samir, Mimi.*

*Su magia y vida han hecho más larga la mía.
O, al menos, han hecho que valga la pena vivirla.*

*A Tomaš, Bára, Lucie, Matýaš, Barbora, Luciana, Kristýna,
María, Sarah Rimer, Fátima, Gabriel, Óscar, Itai.
Por las lecciones de alegría, sea en lengua eslava o romance.*

*A la ciudadanía de Morena que, con base en voluntad
y convicciones, lucha por un mejor país, sin esperar
nada a cambio salvo la satisfacción de dejar
este mundo mejor de como lo encontraron.*

*A los grandes del futuro: Ghislaine, Alonso, Mateo, Paula y Jay.
A mis hermanas y hermanos: Adolfo, Abraham, Caro y Alondra.
A mis padres, Verónica y Héctor.
A todos ellos, por ser la base del mundo, al menos del mío.*

Héctor Alejandro Quintanar

Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové,
República Checa, abril de 2019







INTRODUCCIÓN

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SURGEN DE LA NADA

Todas las personas tenemos una historia detrás, dinámica, zigzagueante, compleja. Esa historia conlleva relaciones con las de otras personas que la influyen, condicionan, cambian o hasta la definen por completo.

De tal suerte que es válido decir que las fechas que señalan el nacimiento y fallecimiento de alguien no son el principio y el fin de dicha historia, sino solo el marco principal que la contextualiza. Así, podemos pensar que cualquier relato sobre nuestra vida podría comenzar años antes de nuestro nacimiento, acaso cuando nuestros antecesores se conocieron y, de algún modo, entre azaroso o planeado, se fue abriendo la posibilidad de nuestra existencia. La vida de cualquiera es una cuestión compleja, a tal grado que, como sostiene el sociólogo Wright Mills, a través de ella podemos leer un fragmento de la historia de la sociedad.

Con los fenómenos sociales y políticos ocurre lo mismo. No son apariciones espontáneas; lograr su aproximación implica poner atención tanto al contexto que los rodea como a los antecedentes que conlleva. Con esos elementos podemos hacernos una idea más o menos sustentada de ellos. De ahí que siempre la Historia sea un referente indispensable cuando queremos explicarlos.

Desde esa perspectiva, describir el surgimiento de un partido político no es cosa fácil. Menos aún en nuestro país, donde, como dijo alguna vez Pablo González Casanova, los partidos políticos suelen explicarse a través de mitos antes que de valoraciones documentadas. Pareciera que para esas explicaciones a veces se prefiera la leyenda antes que la Historia.





¿Acaso el PRI puede comprenderse sólo como el partido “heredero de la Revolución mexicana”? ¿El ímpetu de un ideólogo conservador como Manuel Gómez Morin es suficiente para explicar la fundación del PAN? ¿Es el PRD una simple ruptura del PRI? Reducir dichas organizaciones políticas a esas consignas puede resultar más problemático que esclarecedor, y poco abonará a comprenderlas, aun cuando esas frases, como suele suceder con los mitos, tengan ciertas pizcas de verdad.

Bajo esa lógica queremos explicar la fundación de un partido político, Morena, a través de sus antecedentes y el contexto en el que se consolida como tal. Se trata de ofrecer una breve recopilación de su origen y los episodios de los que abreva, bajo la premisa de que dicha explicación sea sencilla, sin que eso signifique, en la medida de lo posible, simplificarla. Si bien esta labor va dirigida primordialmente a la militancia de esa organización con fines formativos, también se trata de ofrecer un compendio abarcador, que da una idea en general sobre el partido, para cualquiera, simpatizante o no. Por respeto a ese público en general, este texto está redactado en el tono más claro y menos técnico posible, pero también —por respeto al rigor— se evitará caer en reducciones simplistas.

¿Cómo se gesta el principio de Morena? ¿Por qué este partido político se asocia con tanta contundencia a la figura de Andrés Manuel López Obrador, como, en su momento, en su origen el PRD se vinculó a Cuauhtémoc Cárdenas o el PAN a Manuel Gómez Morin? ¿Es Morena una ruptura del PRD? ¿O, acaso, es solo una amalgama de disidentes o renunciantes del PRI, del PAN y del PRD?

Aunque el origen de Morena toca algunos de los puntos planteados en esas preguntas, no se agota en ninguna de ellas. Tampoco los datos fríos nos explican mucho. Si nos asomarnos en exclusiva a la información del Instituto Nacional Electoral, sabremos que Morena obtuvo su registro el 9 de julio de 2014, y que en 2015 tuvo su primera participación electoral, en la que se posicionó como la cuarta fuerza política. Sin embargo, ello no aclara gran cosa.

Mientras los partidos nuevos en México luchan por conservar el registro, Morena en su debut fue mucho más allá: logró convertirse en la primera fuerza





electoral en la Ciudad de México, fue competitivo en nueve entidades federativas y se posicionó con cierta soltura a nivel nacional, a excepción de tres estados de la República. En ese año, Morena no luchó solo por sobrevivir la prueba de las urnas sino por ubicarse inmediatamente como un “partido grande” en casi todo el país.

¿Qué hacía de Morena una organización con tal fuerza en su aparición? La explicación se halla en que el partido logró su registro en 2014, pero sus raíces datan de mucho tiempo antes, pues el núcleo social que lo fundó había ejercido un activismo político, más o menos organizado y de presencia territorial, con cierta estabilidad y amplitud, al menos desde una década atrás, de cara a diversas coyunturas, como la elección de 2012, la crítica a las alianzas PAN-PRD en 2010, la elección de 2009, la reforma energética de Felipe Calderón en 2008, la elección de 2006 y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, personaje que destacó en dichos episodios como un actor central.

Es por ello que entender el origen de Morena obliga a retomar ese resumen reciente, cuestión que así mismo nos planteará nuevas preguntas y nuevas explicaciones, porque con base en la evidencia disponible, ***Morena tiene su génesis en un movimiento político-social que viene de un episodio político concreto: el proceso de desafuero que el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrentó en 2005 a solicitud de la Procuraduría General de la República del gobierno de Vicente Fox.***

Eso, de entrada, requiere aclarar muchas aristas. ¿Por qué se toma como punto de partida ese episodio en específico? Porque a partir de ahí se comenzó a configurar un movimiento político-social que, en un principio, se oponía a un acto autoritario concreto, pero después fue adoptando otros objetivos, hasta que en 2012 optó por tornarse en un partido político formal.

Lo complicado, e importante, está en saber qué había detrás del contexto del desafuero y qué hacía de este algo inusual. En México, varios políticos han sido desaforados y ello no ha desembocado en nuevos partidos. ¿Qué había en el caso de AMLO que lo hiciera algo atípico?

No se trataba de un político común; *era un Jefe de Gobierno que, con todo y contraluces, gozaba de amplio reconocimiento y aceptación entre sus guber-*





nados. No se trataba de un desafuero cualquiera; todo indicaba que, más que una solicitud jurídica, se trataba de un golpe político en contra de un gobernante para desplazarlo ilegítimamente de una probable candidatura presidencial. No se trataba de cualquier contexto, *sino que ese período era la antesala de las que consolidaran el proceso democratizador mexicano, mismo que el desafuero enturbiaba*.

¿Cómo fue que se llegó a ese punto? El desafuero, en sí mismo, y el personaje que lo protagonizó, AMLO, tenían a su vez una trayectoria detrás, que abonaron en el impulso ciudadano que optó por defenderlo ante ese golpe ilegítimo. Un repaso por dicha trayectoria, su entorno e influencias, resultan a su vez una base explicativa indispensable por dos razones: en diversos episodios de la conformación de Morena, *la biografía de AMLO ha sido un eje articulador para los militantes*, pero, más importante, porque no es sólo la figura de López Obrador, sino en el tramo de la historia reciente donde su actuar comenzó a despuntar, donde se encuentran las raíces de Morena. Explorar ambas de manera conjunta, nos arrojará luz para clarificar el surgimiento del partido.

Resta decir que este texto se basa en la investigación titulada *Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional. Antecedentes, consolidación partidaria y definición ideológica de Morena*, publicado por la editorial Ítaca en 2017. Las múltiples fuentes de lo aquí apuntado se encuentran en ese documento, y se omiten en aras de darle a este cuadernillo una redacción más ágil.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAPITAL POLÍTICO: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ANTES DEL DESAFUERO

Como en muchos partidos en la historia de México y el mundo, en Morena ha tenido un peso sustancial la presencia de un político en específico: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No es algo nuevo, ni tampoco único, puesto que en muchos momentos históricos ciertas figuras adquieren alguna relevancia que les da un papel fundacional. Con base en ello es que se expone un reco-





ruido breve sobre la trayectoria de AMLO, para lograr una mejor comprensión de su papel político, y con ello del partido que, bajo su influencia opositora, se formalizó en 2014.

Nacido en una familia de comerciantes en Tepetitán, Tabasco, en 1953, López Obrador creció en un ambiente peculiar, donde sin pasar penurias económicas graves, tampoco tuvo una vida de lujos. Sus padres eran conocidos en su región por su talante trabajador y daban mucha importancia a la educación de sus hijos.

Ese sería el primer punto nodal en la biografía de López Obrador, pues la escuela secundaria fue el espacio donde comenzaría a politizarse y a desarrollar un interés por la historia bajo la tutela de un mentor singular: el profesor Rodolfo Lara Lagunas, joven pedagogo tabasqueño, titular de la materia de Civismo, en la que en lugar de ceñirse estrictamente al libro de texto (llamado *El buen ciudadano*), discutía apasionadamente con los alumnos el acontecer diario, sobre todo la movilización estudiantil de 1968, y sobre la historia de México.

Influido fuertemente por ese maestro, AMLO comienza a labrar inquietudes y a definir su vocación. De ese periodo viene su decisión por estudiar Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la que accedería vía examen de admisión en 1972 al mudarse a la Ciudad de México, con el apoyo del poeta Carlos Pellicer, a quien había conocido poco antes en una relación cordial y cercana, y quien lo recomendó para vivir en la "Casa del estudiante tabasqueño" en la capital.

En la UNAM, AMLO vive una serie de paradojas. No es el alumno de mejor promedio y no participa demasiado en el debate académico, pero sí se interesa en temas históricos y en asuntos de política real: participa en marchas de trabajadores en la Ciudad y le atrae ver cómo esas acciones visibilizan problemas sociales. Como estudiante se documenta a profundidad sobre la figura del presidente chileno Salvador Allende. Suele optar por ser alumno de maestros de un perfil político muy definido en las izquierdas, al cursar clases con notables intelectuales, conocedores o militantes de esa postura como Octavio Rodríguez Araujo, René Zavaleta Mercado, Raúl Olmedo y Paulina Fernández Christlieb, entre otros.





Sin destacar como líder estudiantil, AMLO hace de su Facultad el epicentro de su formación. Para él, lo ahí aprendido, más que material de reflexión, es material para la acción. A la par de sus aprendizajes sobre Allende, se interesa fundamentalmente por dos procesos históricos mexicanos: la época de Benito Juárez (interés que más tarde le hará elegir este tema para su tesis) y la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas.

Pese a esos intereses, debido a sus condiciones materiales (vive con escasos recursos, alejado de su familia), parece ser un estudiante a medio gas. Sin embargo, en esa época América Latina vive un proceso muy arduo de efervescencia política. Es el contexto de la Guerra Fría y la UNAM es un punto nodal de discusión académica en un periodo en donde las ciencias sociales son muy intensas y florecientes en la región.

El exilio latinoamericano ha enriquecido las aulas unamitas y la vida política del mundo se debate ahí con intensidad. Las izquierdas en México, que en la política real tienen apenas espacios marginales o nulos, son, sin embargo, un ideario frecuente en las aulas universitarias. Son aún las postrimerías del movimiento de 1968 y el ambiente progresista parece ser la regla en la Universidad.

En ese contexto, un hecho histórico sacude a esa postura política. Las izquierdas han empleado mucho tiempo de su existencia en América Latina para debatir si la toma del poder debe hacerse a través de la vía armada o a través de la democracia. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 parece inclinar la balanza hacia un lado. Pero una década más tarde, el triunfo electoral del socialista Salvador Allende en Chile replantea las cosas: parece que en el continente sí hay manera de derrotar a las derechas en el juego de las urnas.

AMLO se apasiona por la figura de Allende y admira sobre todo las políticas sociales de su gobierno. Sin embargo, en septiembre de 1973, el presidente es víctima de un golpe de Estado que no solo lo deforma, sino que lo asesina. En la veleidosa historia de América Latina, ese periodo de la Guerra Fría, sin embargo, será prolífico en dictaduras y golpes que hieren a diversos países de la región.

López Obrador, a partir de ahí, se torna estudiante de tiempo completo, quizá acicateado por la indignación ante el asesinato de uno de sus referentes



como universitario. Su paso por la facultad parecía solo confirmar algo ya sabido por él: su vocación de trabajar en el ámbito político. La Facultad donde egresó es plural. Sin embargo, se trata de un centro crítico donde abunda un perfil opositor al oficialismo priista. A pesar de eso, no se convirtió en un militante de la oposición, cuestión que iría aprendiendo, paradójicamente, dentro del propio PRI. Así, apenas concluidos los cuatro años de licenciatura (y sin titularse aún) regresa a Tabasco, donde vive un giro biográfico importante.

En ese momento, mediados de los años setenta, Carlos Pellicer vive un momento de dualidad. Ha destacado toda su vida como un militante contra el autoritarismo y defensor de los derechos humanos. Se asume como un luchador antifascista, indigenista y crítico del PRI y del Gobierno. Sin embargo, dentro del tricolor hay un intento por congraciarse con la intelectualidad mexicana —luego de los hechos del 68— y generar enlaces con ella, que incluye invitaciones a cargos de elección popular. El PRI en los hechos es un partido dominante y poco democrático, pero su seno es un aglutinador ideológico amplio, en donde tienen cabida expresiones políticas y militantes con perfiles contradictorios.

En ese tenor, Pellicer es invitado por el PRI a ser senador. El poeta es un activista generoso antes que un funcionario, pero inquieto por “hacer algo” por la vida de las comunidades indígenas, y con cierto pragmatismo (ya que fuera del oficialismo en Tabasco había poco margen de maniobra para incidir en las decisiones colectivas), acepta la candidatura, e invita al recién egresado AMLO, quien lo buscó al concluir sus materias, a trabajar en su campaña.

El estilo de Pellicer sería definitorio para AMLO. El poeta hace campaña a ras de suelo, y elabora su diagnóstico de la región con base en asambleas municipales donde pone en el centro



de su atención al sector campesino y a las comunidades indígenas chontales.

Al llegar al senado es magnánimo con su discípulo AMLO, a quien impulsa como director regional del Instituto Nacional Indigenista (INI). Es en ese momento cuando AMLO debuta en la administración pública y comienza a labrar un capital político propio en la región.

El Instituto a su cargo es parte de un proyecto federal con cuantiosos recursos. AMLO trabaja de forma hiperactiva y los emplea para implementar mejoras y beneficios directos para las comunidades de la zona. Entre ellos, se destaca la construcción de casas, el otorgamiento de créditos y la ejecución de un sistema de siembra parecido al de las chinampas, que sería exitoso.

A la par de ello, en términos personales, el director del INI contrasta con muchos funcionarios porque tiene un estilo modesto de vida. Ese trabajo visible sería fundamental para el futuro cercano de AMLO.

En 1982 llega a la gubernatura de Tabasco el intelectual Enrique González Pedrero, quien impulsa a AMLO como dirigente estatal del PRI. Sin embargo, desde ese espacio, López Obrador entra en pugna con diversos ediles de su partido a causa del control y fiscalización de recursos, y su desplazamiento del

cargo lo distancia de la administración pública tabasqueña.

Es en ese punto donde empieza a labrarse un perfil opositor. Si bien no renunció a su militancia priista, AMLO regresa a la Ciudad de México, donde concluye su licenciatura, profundiza sobre el gobierno de Benito Juárez (de esos años data un libro de su autoría: *Del esplendor a la sombra: la República restaurada*) y comienza a trabajar en la Procuraduría Federal del Consumidor bajo las órdenes de la doctora Clara Jusidman, en un puesto medio que le brinda ventajas y comodidades.





En el país, sin embargo, las cosas no son tan tranquilas. En su parte final, el sexenio de López Portillo prometía “administrar la abundancia” ante una inminente bonanza petrolera producto del descubrimiento de grandes yacimientos. Empero, ese auge no se manejó de forma adecuada, y cuando los precios del combustible bajaron, sobrevino una aguda crisis económica.

La deuda externa mexicana crecía mientras se gestaba un estancamiento productivo, a la par de que no funcionaba la sustitución de importaciones. Con ese panorama crítico, llegó al gobierno de Miguel de la Madrid, mediante una elección propia del viejo régimen priista, donde los votantes, en una simulación democrática, solo ratificaban a un personaje previamente elegido por el presidente saliente. La administración de de la Madrid, no obstante, significó un giro ideológico total.

Desde el gobierno, poco a poco se fueron abandonando los programas del “nacionalismo revolucionario” (del cual solo se conservó la retórica), el Estado fue renunciando a su labor de promoción de bienestar social y el Gobierno se adoptó a los postulados del “Consenso de Washington” que pretendían, con el aval de organismos internacionales, ponderar lo privado sobre lo público, reducir el gasto social y minimizar el Estado a mero garante de la seguridad pública. En suma, el PRI desplazó de su ideario los principios inscritos en el pacto social de la Revolución mexicana, reflejados en la Constitución de 1917.

Ese abandono del Estado como garante del bienestar social fue un fenómeno mundial que llegó al poder en diversos casos internacionales a través de las urnas, como con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, pero en América Latina ese sistema económico no se abrió paso a través de los votos sino de la violencia, pues el precursor del mismo en la región fue el dictador Augusto Pinochet en Chile, tras encabezar el golpe de Estado que derrocó al presidente legítimamente electo, Salvador Allende, en 1973. En México, ese proyecto económico no llegó por la ruta golpista, pero sí a través de la simulación democrática, que fue la regla durante los 70 años de gobiernos priistas en el siglo XX.

Este giro ideológico en el gobierno (que empezaría a llamarse neoliberal) rompió la histórica disciplina al interior del PRI, cuya vida interna en realidad





siempre había estado supeditada al presidente de la república. Sin embargo, varios miembros del tricolor comenzaron a ver con preocupación ese cambio ideológico porque planteaba dos paradojas: resultaba desconcertante que un partido, por muy heterogéneo y amalgamador que fuera, como el PRI, atentara con las políticas de gobierno contra sus principios fundacionales (el Estado social emanado de la Revolución de 1910) y, por otro lado, ese mismo partido, autodefinido como nacionalista y revolucionario, acatará un programa de gobierno emanado del exterior.

En el seno tricolor, varios militantes, bajo el argumento de democratizar al partido y eliminar el “dedazo” ante la venidera elección de 1988, alzaron la voz para, en el fondo, tratar de recuperar los principios sociales de la Revolución en el partido y el Gobierno. Quien encabezó esta postura (formalizada en 1986 con el nombre de “Corriente Democratización y Participación Política”) fue el emblemático ex gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Lázaro Cárdenas.

AMLO, desde su posición de funcionario, vio con buenos ojos esa Corriente y poco a poco se fue identificando con ella, hasta convertirse en uno más de sus integrantes. La Corriente enfrentó muchas adversidades y no logró su cometido de tomar la dirección ideológica del PRI, pues en 1987 fue “destapado” como candidato tricolor el ex secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, promotor fundamental del proyecto neoliberal.

La Corriente Democrática no era solo un llamado de alerta sobre la pérdida de principios ideológicos; resultó así mismo una sacudida general para el país, pues con el tiempo se fue nutriendo de un fuerte influjo ciudadano (movimientos urbano-populares emergidos tras el temblor de 1985, activistas, estudiantes, capas medias de profesionistas), proveniente de diversas expresiones democráticas, que veían en ella no solo un llamado de atención en el tema económico sino una crítica frontal al viejo régimen autoritario.

Ante la candidatura de Salinas, la Corriente se escindió del partido y dio origen al que sería el primer gran frente electoral opositor al PRI en el siglo XX mexicano: el Frente Democrático Nacional (FDN), pues con la ruptura liderada





por Cárdenas y la suma de diversas fuerzas políticas para construir con él una candidatura presidencial (entre ellas sectores importantes de las izquierdas política y social en México), había fuertes posibilidades de que resultara exitosa. El abandono de la labor social del Estado había hecho que la postura moderada y nacionalista del ingeniero fuera vista con buenos ojos por diversas izquierdas mexicanas; incluso algunas con proclamas socialistas en un periodo donde este ideario se tornaba reformista, y en un momento de severa crisis para esa postura ideológica en el mundo, donde se exhibían las iniquidades de los regímenes llamados "socialistas" en Europa, y el Muro de Berlín y la Unión Soviética, su referente fundamental, estaban por caer.

la elección de 1988, cuyos resultados fueron fraudulentos y dieron pie a una movilización ciudadana que pretendía revertirlos. La movilización fue notoria, pero la posibilidad que se reprimiera desde el poder era latente, dado el autoritarismo vigente. Con ese fundado temor, el ingeniero Cárdenas y los dirigentes del FDN optaron, no sin dificultades, por la salida institucional de buscar crear un partido. El proyecto neoliberal, representado en la elección de Carlos Salinas, aupada por un fraude, consolidó su paso en México por la vía antidemocrática, a tono con el resto de América Latina.

En ese periodo complicado, donde las protestas por el fraude debían llevarse con suma cautela, se iba a celebrar en noviembre de 1988 la elección en Tabasco. Pese al supuesto triunfo de Salinas, era notorio que el PRI había recibido un duro golpe electoral (a Cárdenas se le reconoció un 31 por ciento de votos), y el clima opositor podía aprovecharse en esa entidad. En la zona chontal, el nombre de AMLO y el prestigio que había labrado como director del INI tenían un peso considerable, y con base en ello diversos ciudadanos de la región contactaron a dirigentes del FDN para sugerir la can-





didatura de López Obrador como una opción con posibilidad de triunfo, con base en las múltiples simpatías que se granjeó ahí como funcionario.

López Obrador duda, pues pone en juego su reciente estabilidad en aras de una candidatura que, dado el prisma tabasqueño que bien conoce, considera que es de futuro incierto y pondera las desventajas que tendría al volver a Tabasco ahora desde la oposición emanada del FDN. Tras un periodo borrascoso acepta y se convierte en el único candidato a gobernador de dicho Frente en el país.

Hace campaña al estilo de Pellicer: a ras de suelo y con un discurso netamente opositor, alentado por el reciente episodio del fraude. La inversión de recursos a favor del candidato priista es fuerte, hay intentos de cooptación por parte de Salinas hacia AMLO –que este rechaza–, y al final, el día de la jornada comicial, también hay irregularidades que ponen en duda su legitimidad.

Como réplica parecida a lo acontecido a nivel nacional, Tabasco vive su propia elección viciada. Los números oficiales dan a AMLO un 24 por ciento de votos, pero la conmoción que generó en el estado lo impulsó para convertirse, a partir de ese momento, en una figura fundamental de la oposición al PRI en la región del sureste mexicano.

DESDE LA OPOSICIÓN: DEL PRD A LA JEFATURA DE GOBIERNO

El Frente Democrático Nacional, luego de muchos vaivenes, se consolida en un partido político, el Partido de la Revolución Democrática, que en ese momento aglutinó tres grandes afluentes: la Corriente Democrática del PRI, un sector de la izquierda partidista (fundamentalmente del Partido Mexicano Socialista) y una vertiente de la izquierda social (movimientos con reclamos urbanos emanados del temblor de 1985, campesinos, trabajadores, estudiantes, intelectuales, sectores universitarios).

La izquierda partidista ha tenido en México hasta ese momento una historia compleja donde su principal referente, el Partido Comunista Mexicano y sus transformaciones; ha vivido mucho tiempo del siglo XX en la clandestinidad, se





ha subsumido a idearios del exterior y ha padecido muchas vicisitudes. Dado el antecedente de 1988, con el PRD parecía articularse el principal partido de las izquierdas mexicanas hasta entonces.

López Obrador es quien toma las riendas de la formación del PRD en Tabasco y, de inmediato, con influencia pelliceriana, le da un perfil “movimientista” (es decir, más allá de lo meramente electoral): toma con firmeza la bandera opositora al neoliberalismo y se organiza con sectores campesinos, chontales y obreros petroleros en el estado, recogiendo sus reclamos y empleando una parte de los recursos del partido para difusión y otras para satisfacer demandas de la población en conflictos apremiantes.

Esa movilización cimbra a Tabasco. Se trata de un estado con escasa tradición opositora (el PAN, con casi medio siglo de existir, apenas suele rebasar el 4 por ciento de votos en elecciones) donde el PRI tiene aún un control férreo de la vida pública. Sin embargo, esa lógica de “partido-movimiento” hace que en las elecciones de 1991 el PRD en su debut en Tabasco logre un 18 por ciento de votos, número elevado comparado con los números del PRD en la media nacional (8 por ciento).

Pero lo más significativo de esa jornada electoral fue que, ante la detección de un sinnúmero de irregularidades a favor del PRI, y en zonas del estado donde el PRD logró votaciones notablemente altas, López Obrador demandara limpieza de la elección y se reconociera el triunfo del partido en varios municipios.

De ahí nacería la primera protesta postelectoral encabezada por López Obrador, quien, con diversas pruebas y testimonios, se moviliza con miles de tabasqueños en una marcha hacia la Ciudad de México: el llamado *Éxodo por la democracia*, cuyo objetivo no es solo sanear las elecciones ante los delitos electorales registrados, sino también mantener todo en un cauce pacífico, al salirse de la entidad, evitar la confrontación y lograr notoriedad pública nacional.

Debido a esto es que el *Éxodo* es bien visto en el país, donde incluso recibe el apoyo de sectores del PAN que ejercían luchas similares, como fue el caso de Salvador Nava, político potosino aspirante al gobierno de su entidad. La marcha llegaría a la Ciudad de México en medio de un reconocimiento generalizado debido a la solidez de sus argumentos y a su cauce pacífico.





La marcha rinde frutos. Obligado a notar las irregularidades priistas, el secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre de mano dura y escasa vocación democrática, reconoce algunas demandas del *Éxodo* y se devuelven los triunfos al PRD en ciertos municipios tabasqueños. Esa movilización estrecharía lazos entre Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, quien se tornaría así en un artífice del PRD más allá de Tabasco.

Carlos Salinas de Gortari acelera el proceso de debilitamiento del Estado iniciado por su antecesor: liberaliza la economía, privatiza decenas de empresas públicas (muchas de las cuales van a parar a manos de gente afín a él), reduce programas sociales tildados de “populistas” o “paternalistas”. En el rubro político, teje alianzas turbias con la cúpula del PAN (las llamadas “concertaciones”) y es responsable de ejercer la mano dura contra las izquierdas en el país, a quienes ninguna o se sospecha que reprime (mientras a los legisladores perredistas Salinas dice “ni verlos ni oírlos”, en el sureste del país hay centenas de militantes de base asesinados en ese período).

El gobierno salinista se vuelve la antítesis de López Obrador, quien en ese lapso persiste en mantener la ruta *movimientista* y tiene contacto organizativo con diversos sectores tabasqueños, donde se destacan campesinos perjudicados por la contaminación de los ríos por parte de Pemex y deudores de cartera vencida. Al finalizar su periodo como dirigente local del PRD en 1992, mantiene cercanía con sectores obreros y se suma a la campaña de Heberto Castillo a la gubernatura de Veracruz. Con dicha trayectoria, en 1994 contendría por segunda ocasión por el gobierno de Tabasco, esta vez con simpatías y apoyos que van más allá de la región chontal.

Es un periodo difícil para el país. La crisis política del fin del sexenio de Salinas es enorme: la economía es débil a pesar de que las medidas neoliberales se anunciaban como solución, los escándalos de corrupción asuelan el panorama y los asesinatos de Luis Donald Colosio y el cardenal Posadas Ocampo enturbian la coyuntura. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en enero de 1994, pone en entredicho el presunto “primer mundo” al que conducía el proyecto salinista, cuya expresión más clara fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.





Sin embargo, esas iniquidades no debilitan al PRI, cuyo candidato Ernesto Zedillo gana la elección ante la candidatura en picada de Diego Fernández de Cevallos por el PAN y el segundo intento de Cárdenas por el PRD. En Tabasco, sin embargo, las cosas no son sencillas para el tricolor.

López Obrador contiende de nuevo por la gubernatura de su estado y en la campaña su rival priista, Roberto Madrazo, gasta de forma exorbitada y con ello hace inequitativa e ilegal la elección. Adicionalmente, de nuevo hay intentos de cooptación hacia AMLO por parte del candidato presidencial Zedillo, y numerosas irregularidades se presentan antes de y durante la jornada comicial, donde destaca el gasto delictivo priista de 241 millones de pesos en campaña. A pesar de las nuevas protestas electorales, no se logra el propósito de reponer la elección.

México vive un período de incertidumbre económica. La moneda mexicana se debilita ante el dólar, cuyo precio pasa de tres a cinco pesos, la inflación y carestía se expanden pese a que presuntamente el candidato priista Zedillo era el “garante de estabilidad”, hechos que AMLO toma también como parte de su discurso contra el neoliberalismo en su protesta postelectoral. En ese sexenio, como opositor a Madrazo y a Zedillo, AMLO mantiene un activismo impugnador y de denuncia ante ambos gobiernos y de apoyo directo a movimientos sociales y sectores afectados por la contaminación del agua en Tabasco, con lo que logra tornarse en una referencia nacional de la oposición reformista al neoliberalismo, lo que le abriría el camino para convertirse, en 1996, en dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática.

En tanto el PRD había transitado un camino de muchas dificultades. Nacido como respuesta a un fraude electoral, y como una sumatoria de fuerzas ideológicas diversas, en sus albores padeció un acoso político y mediático profundo. Militantes asesinados y campañas de desprestigio eran el día a día de la que en ese momento era la organización más fuerte de las izquierdas partidistas, cuya plataforma ideológica parecía ser la superposición de un núcleo de nacionalismo revolucionario con aristas de la socialdemocracia, en un perfil reformista que ya no apunta hacia el socialismo como meta.

Sus tres primeros dirigentes –Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Amalia García– debieron hacer frente a ese acoso. Luego de su actuación movi-





lizadora en Tabasco, AMLO se había ganado la confianza de muchos liderazgos morales, no solo del PRD sino fuera de él. El tabasqueño gana la elección por la dirigencia, y de inmediato le imprime un sello distinto al partido. Con sumo pragmatismo, incluso excesivo, nombra a un secretariado diverso, conformado por personajes de todas las corrientes del PRD, y, en diversas coyunturas, acepta el advenimiento de políticos del PRI a las filas del sol azteca, con miras a darle mejor rendimiento electoral.

Sin embargo, en el plano discursivo y activo, el PRD adquiere un cariz muy diferente. López Obrador encabeza una serie de medidas de fuerte impacto: emplea buena parte del presupuesto que recibe el partido para crear beneficios sociales directos (entrega de libros de texto gratuitos, apoyo a migrantes, pensiones a viudas y familiares de perredistas asesinados) y hace que los legisladores emanados del PRD otorguen parte importante de su sueldo a esas causas y a movilizaciones sociales, ya que “es a esos movimientos a quienes debían sus encargos públicos”. Asimismo, en el plano ideológico, el PRD acelera su trabajo presencial al crear células de socialización política para tener difusores de la causa perredista en todos los distritos electorales del país.

AMLO es pragmático para aceptar priistas y panistas en sus filas (aun cuando eso signifique desplazar a militantes fundadores del PRD y aun cuando muchos de esos ex priistas renuncian al tricolor por cálculos personales y no por principios), pero en el eje del discurso adquiere un tono de franca confrontación contra el neoliberalismo y hace de la denuncia pública una actividad permanente, donde el caso del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) resultó paradigmático.

Esa operación gubernamental consistió en convertir la deuda privada de unos cuantos banqueros en deuda pública, presuntamente con el propósito de que ningún ahorrador mexicano perdiera su dinero depositado en instituciones bancarias. Sin embargo, hubo indicios de que se trataba de una medida causada por el tráfico de influencias de diversos banqueros vinculados al gobierno.

La batalla del PRD contra el Fobaproa fue completa y persistente. En ella, el partido realizó una ardua labor de difusión de información y denuncia política,





en la que se alertaba sobre el fondo de la medida, se visibilizaba a los responsables y se proponía una solución alternativa para los ahorradores.

Con ese actuar como dirigente, con todo y contraluces (fundamentalmente el de congeniar el pragmatismo receptor de priistas con el discurso frontal contra el neoliberalismo del gobierno de Zedillo), el partido se vigorizó y logró un ascenso meteórico: se volvió la segunda fuerza política nacional (logró con ello quitar por vez primera la mayoría absoluta al PRI en la Cámara de Diputados en 1997) y un partido competitivo en varios estados; ganó sus primeras gubernaturas (Zacatecas, Baja California, Tlaxcala), y de manera muy importante, logró el triunfo en la primera elección para Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El Sol Azteca, y la izquierda partidista en general, con la dirigencia de AMLO, logran su mejor rendimiento electoral en la historia. Luego del fraude de 1988 y de optar por la ruta partidista pacífica, el proyecto cardenista gana terreno en la Ciudad de México, tendencia acorde a otras latitudes de América Latina (como Montevideo, Uruguay, o Sao Paulo, Brasil), donde muchas izquierdas logran triunfos importantes, y futura proyección nacional, en gobiernos locales.

La dirigencia de AMLO en el PRD representa un parteaguas en el partido. Al terminar su periodo, en 1999, está en puerta la histórica elección presidencial del 2000, donde el ingeniero Cárdenas despunta una tercera candidatura, impulsado por su gobierno en la Ciudad de México, y a pesar del escarnio ilegítimo de que fue objeto por parte de las televisoras durante su mandato y los problemas que enfrentó como gobernante.

AMLO piensa en una tercera candidatura a la gubernatura de Tabasco. Pero Cárdenas lo insta a ser candidato a la Jefatura de Gobierno, dados sus antecedentes exitosos inmediatos. Ambos, Cárdenas y AMLO, fueron los principales abanderados del sol azteca en esa elección: el primero contendió por tercera vez por la presidencia, mientras el segundo buscaba la ratificación del PRD en la capital.





LA ALTERNANCIA EN EL PAÍS Y LA CONSOLIDACIÓN PERREDISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El 2 de julio de 2000 fue un día histórico para México. El panista Vicente Fox ganó la presidencia de la república, para así desplazar por vez primera en la historia al Partido Revolucionario Institucional, en ella desde hacía siete décadas. La alternancia hacía pensar en la posibilidad de una época diferente en el país y las expectativas ante el presidente Fox fueron muy altas, pues ganó contra una maquinaria priista tradicionalmente propensa a ensuciar elecciones y lo hizo con un discurso frontal a favor de un cambio.

Varias décadas de un incipiente proceso democratizador, gestado desde diversas luchas sociales en el siglo XX mexicano; una reforma política en los años setenta que reconocía a los partidos políticos opositores; un resquebrajamiento de la maquinaria priista en 1988; la construcción de un instituto electoral autónomo y la apertura a la posibilidad de escrutar las elecciones, entre otras cosas, parecían tener un saludable corolario con la alternancia en 2000.

Sin embargo, el panista poco hizo para satisfacer lo que de él se esperaba. A pesar de lo diverso de su gabinete, retuvo en puestos clave a funcionarios priistas –vinculados al proyecto neoliberal, como su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz– y se alió de manera frontal con sectores muy cuestionables de ese partido, como Elba Esther Gordillo. En términos económicos, hacía gala de ser “un gobierno de empresarios para empresarios” y en lo político manifestó una fuerte impericia en temas cruciales, como el querer imponer un aeropuerto en Texcoco sin considerar a los habitantes de la zona, desconocer la realidad en Chiapas y en política exterior doblegarse casi por completo al gobierno estadounidense del conservador y belicista George W. Bush.

En esa misma elección, López Obrador ganó por estrecho margen la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México ante el candidato del PAN, Santiago Creel, que se vio favorecido por el efecto foxista. Como en ocasiones pasadas en los cargos públicos, AMLO nombró un gabinete plural, donde dio preferen-





cia a especialistas más que a políticos de su partido en cargos de suma importancia, y puso de relieve su estilo de trabajo intenso.

Como gobernante, puso en marcha varios programas sociales, destinados fundamentalmente a grupos vulnerables (adultos mayores y madres solteras), hubo construcción de viviendas, la obra pública fue visible y se crearon escuelas preparatorias, una universidad y hospitales. A la par de ello, en su administración se redujeron considerablemente los sueldos y gastos de sus integrantes, con miras a mostrar un gobierno que no estuviera alejado a la realidad de la mayoría de los mexicanos.

Con esas medidas, López Obrador comenzó a destacar con una aceptación muy amplia entre sus gobernados. Gozaba de una notoria popularidad en la ciudad y, dada la relevancia de la capital mexicana, se proyectaba a todo el país. Resultaba un contraste absoluto que, mientras el gobierno de Fox lidiaba con diversos retos y evidenciaba mantener privilegios, AMLO encabezaba uno que parecía austero, eficaz y exitoso. El proceso electoral intermedio de 2003 vendría a confirmar esta percepción.

La debacle panista fue visible: en 2000 el partido obtuvo 207 diputados federales y en 2003 redujo ese número a 148. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el efecto del gobierno de AMLO consolidó al PRD al lograr 37 de las 66 diputaciones locales y ganar 13 de las 16 elecciones en las jefaturas delegacionales. En ese intermedio sexenal, avalado ampliamente por todas las encuestas, López Obrador aparecía ya como un fuerte precandidato de su partido para la contienda presidencial del 2006.

EL PREÁMBULO DEL CONFLICTO DEL DESAFUERO

A pesar de pertenecer a partidos con más tensiones que cercanías en la historia –el PAN y el PRD–, la realidad es que al inicio de sus sexenios, AMLO y Fox tenían una relación institucional cordial. Sin embargo, el desempeño de ambos en sus respectivos gobiernos los fue distanciando, y sin duda el ascenso de la popularidad del tabasqueño en la capital fue un detonante para que el presidente Fox atizara una confrontación con la intención de mermarla. Aun cuando ambos se





espetaban críticas mutuas, el segundo trienio de sus gobiernos los confrontó de manera total.

En 2003 un tema acaparó la agenda mediática: el conflicto acerca de unos terrenos al oriente de la Ciudad de México (el Paraje San Juan), expropiados por el gobierno capitalino mucho antes del inicio de la administración de AMLO, sobre los que un particular, Enrique Arcipreste, asesorado por dos abogados panistas –el ex procurador Antonio Lozano Gracia y Miguel Alcántara–, exigía una indemnización de 1810 millones de pesos.

El caso, sin embargo, no era sólido: la jueza que ordenó la indemnización mostró parcialidad, no había claridad documental sobre quién era el dueño, y en los registros públicos muchas pruebas a ese respecto se habían destruido. Con base en ello, el gobierno de AMLO se negó a pagar dicha cantidad, no solo porque quebraría las arcas capitalinas con ese abusivo monto, sino porque consideraba que no tenía sustento.

La negativa dio pie a que Fox, el PAN y medios afines orquestaran una fuerte campaña contra AMLO, en que se le acusaba de “no respetar la ley”. Tras varios meses en ese tenor, donde el debate se recrudeció, fue la propia Secretaría de la Reforma Agraria del gobierno federal foxista la que exhibió en enero de 2005 un documento que probaba que el Paraje San Juan pertenecía a la Nación y no a Arcipreste. A pesar de que eso daba la razón al Jefe de Gobierno, sus adversarios persistían en señalarlo como alguien que “no acataba la ley”.



Simultáneamente, la prensa dio a conocer que Nicolás Mollinedo, colaborador cercano de AMLO, era un “chofer que ganaba 60 mil pesos”. Si bien el aludido sí conducía el transporte del tabasqueño, su cargo era de Coordinador de Logística, y desempeñaba funciones diversas en la administración capitalina. La intención de la noticia era solamente poner en duda el dis-





curso de austeridad con que se identificaba el gobierno de la ciudad. Fox y el PAN aprovecharon el episodio para de nuevo abrir otro frente discursivo contra AMLO.

Asimismo, en marzo de 2004, se dieron a conocer en los principales noticiarios videos donde personajes vinculados al gobernante capitalino o al PRD efectuaban actividades cuestionables, como apostar fuertes cantidades de dinero en un casino de Las Vegas o recibir y guardar billetes recibidos de un empresario traficante de influencias en un maletín.

Por otro lado, a fines de ese mismo año, desde la Cámara de Diputados, partidos opositores a López Obrador buscaban reformar el artículo 122 constitucional en aras de que la federación dejara de financiar parte de la educación pública en la capital mexicana, lo que en el fondo implicaba que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) tuviera un posible hueco financiero que afrontar y con ello reducir su margen de maniobra para programas sociales.

Esos hechos ponían de relieve diversos elementos: si bien había personajes vinculados al gobierno capitalino o al PRD cuya conducta ameritaba cuestionamientos o sanciones, los opositores a AMLO, encabezados por el gobierno foxista, blandían con esos episodios la idea de que los tres pilares en que el Jefe de Gobierno sustentaba su popularidad –invertir en programas sociales, ponderar la austeridad y erradicar la corrupción– podían hacerse tambalear. Sin embargo, para hacerlo se valían en varios casos de medios poco legítimos, como acusaciones falsas y acoso económico.

El telón de fondo era la elección presidencial de 2006, ante la cual el acecho de Fox a AMLO buscaba restarle popularidad y achatar su margen de maniobra en la Ciudad de México, en un golpeo ilegítimo que afectaba asimismo a los capitalinos. La confrontación se prolongó meses, enturbió los albores del segundo trienio de los gobiernos de AMLO y Fox, y fue el preámbulo de un conflicto que cimbró al país: la solicitud de desafuero del Jefe de Gobierno.



EL DESAFUERO DE AMLO: “LA GOTTA QUE DERRAMÓ EL VASO”

En mayo de 2004, en medio del clima de crispación que aquejaba al país, la Procuraduría General de la República del gobierno de Fox, con Rafael Macedo de la Concha a la cabeza, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del Jefe de Gobierno para que fuera juzgado por el presunto delito de desacato. Perder su inmunidad constitucional sería un posible primer paso para que, de ser condenado, pudiese perder por completo sus derechos políticos y con ello zanjaría totalmente la posibilidad de ser candidato presidencial.

El hecho atizó la animadversión de Fox, quien a partir de ese momento parecía tener como prioridad desvirtuar todos los días a AMLO y acusarlo de no respetar la ley, cuestión que secundaron con fuerza el PAN y los múltiples medios afines al presidente panista. Sin embargo, pese a esa persistencia discursiva, pronto afloró una serie de datos que ponían en entredicho la solidez de la solicitud de la PGR.

La acusación que daba base al desafuero era que el GDF no había acatado una orden de un juez que mandaba detener la hechura de una obra en un predio en el poniente de la Ciudad (El Encino), porque presuntamente bloqueaba

los accesos al mismo, propiedad de un particular, que se amparó a ese respecto. Los hechos, sin embargo, iban más o menos de la siguiente manera.

La *Gaceta del Distrito Federal* publicó en noviembre de 2000 –antes de que AMLO asumiera el cargo de Jefe de Gobierno– que se expropiaban dos fracciones del predio El Encino por razones de utilidad pública. Ante ello, la Promotora Internacional





Santa Fe, supuesta dueña del terreno, interpuso un amparo, ya que lo que el GDF llegara a construir ahí bloquearía los accesos al predio.

El gobierno de AMLO dispuso construir ahí un camino para comunicar a un hospital, ante lo cual un juez ordenó detención de las obras. Al presuntamente no cumplir dicho mandato, se acusó que el GDF violó la ley y se inició el proceso legal que devino en la solicitud de la PGR.

Sin embargo, las inconsistencias jurídicas eran muchas. De entrada, el caso no lo había iniciado AMLO, sino que se originó antes que él llegara la Jefatura de Gobierno. Asimismo, cuando la Promotora Internacional Santa Fe llevó el caso ante un primer juez, este lo declaró infundado. Al llevarlo ante un segundo juez, este sí le dio validez, pero exculpó a varios funcionarios del GDF, excepto a López Obrador.

La principal base del juez para acusar al GDF era una frase descontextualizada del Secretario de Gobierno capitalino, José Agustín Ortiz Pinchetti, pues en los hechos la obra sí se había detenido aun cuando el caso era inconsistente. Las inspecciones periciales concluyeron que el predio en cuestión solamente tenía un acceso y que este jamás había sido obstaculizado por las obras del GDF.

Ante ello, el GDF interpuso una queja contra el juez que dio validez a la acusación de la Promotora Internacional Santa Fe, pero aun antes de que la misma tuviera cauce y se resolviera, se abrió una averiguación previa contra López Obrador por parte de la PGR. Por si esto fuera poco, las inspecciones posteriores hacían notar que, en efecto, las obras sí se habían detenido (a pesar de que al GDF le asistía la razón) y que la parte del terreno en cuestión ni siquiera estaba en la supuesta propiedad del dueño.





En el aspecto político, resultaba un despropósito que un caso administrativo, donde el GDF podía demostrar contar con la razón, pudiese terminar con el encarcelamiento de AMLO, máxime cuando había otros casos parecidos en el país (algunos de los cuales tenían como responsable al gobierno federal foxista) y generaba muchas sospechas el hecho

de que el supuesto dueño de El Encino, Federico Escobedo, era un personaje que había ya estado en la cárcel por invadir predios.

En suma, el caso era endeble o turbio. Con base en los elementos arriba citados, más otros que se fueron sumando, se generó una amplia interpretación ciudadana de que el caso no buscaba “hacer valer la ley” sino usar a la PGR como trampa para destruir los derechos políticos de AMLO, que podría terminar en la cárcel. En términos políticos, los episodios anteriores (videoescándalos, el caso Nicolás Mollinedo, la Reforma al artículo 122, el caso Paraje San Juan, etcétera) parecían limitarse a atacar el *prestigio y margen de maniobra* de AMLO como político y gobernante con miras a la elección de 2006. Pero el desafuero iba más allá, pues, a diferencia de los otros puntos, sí podría desembocar en una *cancelación total* de sus derechos políticos y borrarlo por completo de la competencia.

No obstante que en algunos de esos episodios el GDF sí tenía iniquidades que afrontar (como el caso de los videoescándalos, donde fue innegable la corrupción de integrantes cercanos a la administración capitalina), en la mayoría de ellos el gobierno foxista y sus afines se habían valido de tergiversaciones de la ley, distorsiones y trampas para tratar de mermar la imagen del tabasqueño. Se daba así la idea de que el desafuero era una especie de “gota que derramaba el vaso” en las intenciones del gobierno federal por acorralar al GDF, perjudicar a los capitalinos y cercenar los derechos políticos de AMLO con miras al 2006.

Durante todo el tiempo que duraron estos conflictivos episodios, el GDF



emitió una defensa política que, sin embargo, parecía no salirse de los parámetros eminentemente partidistas y administrativos: el PRD convocaba a marchas y concentraciones públicas para defender a AMLO, mientras que los recursos de comunicación social del gobierno se invertían en campañas informativas que denunciaban el hostigamiento foxista.

Pero el desafuero sacudió a todo el país. Diversas voces en los medios comenzaron a alertar que ese proceso tenía tintes políticos más que jurídicos. Otras, de manera frontal acusaban que ese juicio de procedencia era un simple y llano “golpe de Estado” contra López Obrador. La opinión generalizada era que ese proceso demeritaba la elección de 2006 porque desplazaba, de forma ilegítima, a un posible candidato.

Más al fondo, se ponía de relieve que el desafuero iba más allá de un brete antidemocrático. En su trayectoria, AMLO se había distinguido por su oposición al esquema neoliberal y su denuncia a los abusos generados por los gobiernos identificados en esta postura económica. La animadversión del gobierno foxista parecía entonces querer maniatar a un adversario político no por una violación a la ley, sino porque su gobierno en la Ciudad de México y su posible candidatura presidencial representaban algo que podría ser distinto a esa tendencia. Para muchos activistas contra el desafuero, no se trataba solo de defender el proceso democrático, cuestión fundamental, sino, asimismo, reconocer cierta consistencia opositora en la trayectoria política de AMLO, a pesar de provenir del propio PRI.

Cuando el caso llegó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, a inicios del 2005 el ambiente político había llegado a un punto muy álgido. En el



debate público, a diario se daban a conocer más inconsistencias o datos que debilitaban aún más el endeble argumento de la PGR y su discurso. Por ejemplo, se dio a conocer en diversas publicaciones que Federico Escobedo era cercano a Vicente Fox y que el principal fiscal del caso contra AMLO, el subprocurador Carlos Vega Memije, tenía en su haber acusaciones de represor, lo que restaba credibilidad a su discurso de devoción por “el Estado de derecho”.

Poco a poco se fraguaba con información la noción de que el desafuero era un intento de golpe político ilegítimo, por lo que el debate público parecía dividirse entre los que se oponían a dicha trampa (simpatizaran o no con AMLO) y



un sector que lo secundaba, sin importar la debilidad del caso ni la estabilidad del proceso democratizador mexicano. Detrás de esta última posición sobresalían algunas élites económicas cercanas a los últimos gobiernos mexicanos, por lo que el conflicto del desafuero parecía en el fondo una disyuntiva entre optar por la defensa de una elección democrática, sin candidaturas censuradas a priori (con la posibilidad de que en ella triunfase un candidato que representaba un proyecto político alternativo) o enturbiar el proceso electoral con tal de defender al sistema neoliberal vigente.



En febrero de 2005, cuando el caso ya estaba en manos de la Cámara de Diputados, el desafuero se convirtió en el tema principal de la vida pública mexicana, no solo para los partidos y actores políticos involucrados de forma directa en su resolución. Diversos sectores sociales (académicos, intelectuales, sindicales, empresariales, organizaciones campesinas, iglesias, comunidad artística) emitieron algún posicionamiento al respecto. Parecía que el tema no dejaba indiferente a nadie, dada su relevancia.

El Gobierno federal y aliados gestaron una campaña mediática persistente para llamar al “respeto al Estado de derecho”, mientras organizaciones patronales identificadas por su apoyo irrestricto a Fox y diversos empresarios señalados por hacer su fortuna mediante el tráfico de influencias, publicaron desplegados donde llamaban al “respeto a la ley”, postura que secundaban con declaraciones, artículos, publicaciones e inserciones pagadas, numerosos personajes identificados como adversarios de AMLO.

Sin embargo, el clamor general era de una franca oposición al juicio de procedencia. Resultó muy significativo que entre las voces en contra del desafuero hubiera muchas de personajes que eran severos críticos de López Obrador, pero reconocían lo endeble de la imputación en su contra y su contenido antidemocrático.

Mientras la totalidad del PAN y un sector predominante del PRI hacían suya la acusación foxista, los partidos que enarbolaron a AMLO como Jefe de Gobierno (PRD, PT, Convergencia) iniciaban labores de difusión de información y de oposición contra el desafuero. Sin embargo, el activismo en ese sentido pronto rebasó a dichos partidos y se tornó en un reclamo más allá de ellos.

Si bien las convocatorias a actos públicos de rechazo al desafuero





provenían primordialmente del PRD, diversos ciudadanos, por iniciativa propia, empezaron a expresarse al respecto. A través del envío de cartas a periódicos, colocación de carteles rústicos en sus casas, exhibición de estampas o cartulinas con mensajes políticos en vehículos, entre otras muchas acciones simbólicas, se percibía en la capital del país un rechazo generalizado a la trampa del la PGR. Sin embargo, esa efervescencia ciudadana era espontánea y parecía carecer de organización.

El punto cenital del proceso comenzó a inicios de abril de 2005, cuando la Sección Instructora de la Cámara votó a favor de que el juicio de procedencia contra AMLO se sometiera al pleno, en donde se aprobó por una mayoría (360 votos a favor y 127 en contra), encabezada por casi la totalidad de diputados del PRI y el PAN, que secundaron acriticamente a la PGR y a las cúpulas de sus partidos, en detrimento de los argumentos jurídicos y democráticos en contra.

En esa fecha histórica, el 7 de abril, en el debate en la Cámara de Diputados se pudo ver el entramado de fondo, pues el discurso de AMLO en su defensa, y el de quienes argumentaron en su contra, dejaron en claro que en ese proceso no se juzgaba una cuestión legal sino más bien el adelanto de la disyuntiva central de la elección de 2006: ratificar el modelo neoliberal o abrir la puerta a un aspirante que no compartía esa visión económica.

El llamado de López Obrador en aquel momento fue un parteaguas: no solo denunció la farsa del desafuero, también expuso el tema de fondo; denunció a los integrantes de élites económicas y políticas que promovían su inhabilitación y declaró su intención de enarbolar un proyecto presidencial que abogara por los olvidados y excluidos por el régimen vigente. Asimismo, convocó a actuar ante ello a través de la "resistencia civil pacífica", que consistía en acciones colectivas de diversa magnitud con el fin de difundir la idea de que el desafuero era injusto y hacer saber a los promotores de este, de forma simbólica, el rechazo ciudadano a la maniobra.

A partir de ese momento, AMLO comenzó un recorrido por el país para hacer concentraciones públicas para informar de su situación, extender el tema más allá de la capital, y esperar las consecuencias jurídicas del juicio, que incluían la posibilidad de que una orden judicial lo encarcelase. El de-





bate sobre su caso era ya un tema nacional, que asimiló la efervescencia capitalina.

En ese contexto, la espontaneidad ciudadana comenzó a tener un cauce: varios ciudadanos iniciaron diversas actividades de socialización política más intensas y sistemáticas: reuniones vecinales, difusión de información, comunicación cara a cara, brigadeos estudiantiles, puntos informativos en el transporte público, etcétera. De forma organizada, se comenzó a generar un sistema de difusión de ideas sumamente importante: los llamados “círculos de estudio”, donde ciudadanos apartidistas, invitaban a alguna figura pública, periodista o experto, a exponer en foros abiertos su opinión sobre esa coyuntura crítica.

Asimismo, en el discurso público y en internet, el desafuero fue el pábulo para que emergiera una enorme cantidad de páginas, blogs, videos, documentos de toda índole que se oponían al mismo y que corrían a la velocidad del hiperespacio, correspondidos con acciones colectivas: mítines, concentraciones públicas, marchas y, también, acciones simbólicas de funcionarios y legisladores contrarios al desafuero (huelgas de hambre escalonadas, tomas simbólicas de las mesas directivas de los recintos legislativos, etcétera).

Muchos de esos espacios de difusión de información empezaron a hacerse más concretos (con días, lugares y frecuencia fijas), lo que pronto abonó a que la percepción del desafuero como una injusticia tuviera una amplia resonancia en todos los sectores sociales, incluidos los que menos interés manifestaban por cuestiones políticas.

Ante la escalada propagandística en los medios, donde el gobierno de Fox invirtió millones de pesos en lanzar anuncios a favor “del Estado de derecho”, y



mientras las televisoras principales tendían a las opiniones en contra de AMLO, ese activismo ciudadano fue una verdadera contracampaña de amplio alcance.

La opinión pública mexicana fue prácticamente unánime en contra de la jugarreta foxista. Algunos pasajes dejaron ver la profunda preocupación por la democracia mexicana, como cuando el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, se opusieron al desafuero. Asimismo, a semejanza del gran caricaturista Abel Quezada en 1968 (quien publicó un cartón enteramente en negro para protestar por la matanza de estudiantes), los más



importantes cartonistas mexicanos concertaron el 4 de abril de 2005 la publicación de una obra con el título *La justicia ha muerto*, donde dibujaron la leyenda “No a la canallada del desafuero” en un recuadro negro.

Prácticamente no hubo sector que dejara de pronunciarse a propósito del desafuero: el EZLN, organizaciones patronales, campesinas, obreras, sindicatos, la academia, deportistas, artistas, integrantes de la comunidad creadora, intelectuales... Incluso desde un sector tradicionalmente despolitizado, como el

de los futbolistas profesionales, hubo algunas voces en contra del desafuero. Siempre con el mismo telón de fondo: detrás de los posicionamientos en contra y a favor del desafuero parecía camuflarse la simpatía o el rechazo a una eventual candidatura presidencial que enarbolará un proyecto distinto de país.

En ese contexto, el 24 de abril, llegó el mayor episodio de la resistencia. López Obrador convocó a una marcha de protesta del Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino, que aglutinase en una concentración pública a esa cauda ciudadana que se posicionó en contra del desafuero. Por esas fechas, intelectuales



latinoamericanos, como Idea Vilariño, Eduardo Galeano o Mario Benedetti, y de otras latitudes, como el polaco Ryszard Kapuscinski, el nobel portugués José Saramago, el nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel y el poeta inglés Salman Rushdie, sumaron sus voces al rechazo a la treta antidemocrática contra AMLO. El conflicto adquirió así una dimensión internacional.

Para la fecha señalada, ocurrió una de las mayores marchas de la historia nacional, pues, de acuerdo con cálculos conservadores, se estimaron más de un millón 200 mil manifestantes en la capital mexicana, a o que hay que sumarle que en todo el país hubo acciones colectivas numerosas y expresiones diversas de rechazo al juicio de procedencia en otras partes del mundo.

La manifestación tuvo dos vertientes. Por un lado, fue una expresión de protesta ante Fox y sus aliados por su papel en el conflicto, a quienes les recriminaban su talante antidemocrático. Y, asimismo, en el momento culminante de la protesta, AMLO expresó las líneas generales de un nuevo proyecto de Nación distinto al neoliberal.

Ese ambiente politizado forzó al presidente Fox y a otros actores políticos vinculados al gobierno federal a enfrentar el descontento ciudadano. Si bien, en foros mediáticos a modo, los promotores del desafuero hablaban a favor de este a sus anchas, fuera de estos espacios la realidad era muy diferente, y Fox y el panismo enfrentaban, a diario, expresiones de protesta (fundamentalmente de estudiantes, como la entonces alumna del Tec de Monterrey Karla Solares, que confrontó al presidente Fox al respecto, cuando visitó esa institución a mediados de abril). La crisis política era cada día mayor y la información acerca de que el juicio de procedencia era una chicana seguía fluyendo.

De forma casi autónoma, ese activismo civil fue el que puso en entredicho la jugarreta foxista. La cauda ciudadana movilizada contra el desafuero rebasó por mucho a los partidos, como se constató en la marcha del 24 de abril, en los foros y las plazas públicas de todo el país y en el panorama internacional.

Al final de cuentas, gracias a su movilización, la sociedad logró ejercer una presión efectiva. Su esfuerzo rindió frutos, pues el 27 de abril, apenas tres días después de la marcha –que mostró una fuerza ciudadana sin precedentes– Fox y la PGR regularon cuando aceptaron en un comunicado errático que en el caso





El Encino “No había pena para la acción cometida” (por lo tanto, no era delito), y el presidente declaró que su gobierno “a nadie quitaría la oportunidad” de participar en la contienda presidencial de 2006.

Fue un triunfo completo de la movilización ciudadana. Sin embargo, dicho esfuerzo difícilmente habría alcanzado los niveles que tuvo de no ser por tres factores fundamentales:

1. Los episodios anteriores que evidenciaban un hostigamiento antidemocrático por parte del Gobierno Federal contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en cuyos antecedentes (Paraje San Juan, videoescándalos, etcétera) constaban iniquidades y trampas, más allá de los errores cometidos por personajes vinculados a AMLO o al PRD. Ver esos episodios de forma vinculada al desafuero daba una idea general de que este no era más que la punta de lanza final de una estrategia ilegítima para desplazar a un adversario.
2. Las inconsistencias mismas del propio juicio de procedencia, que destacaban que el Gobierno Federal se estaba valiendo de un caso muy endeble para maniatar a un rival político. Este punto, en consonancia con el anterior, dejaba ver que, en efecto, la animadversión de Fox contra AMLO no nacía del presunto “respeto a la ley”, sino a que representaban proyectos políticos y económicos distintos, y Fox no estaba dispuesto a dirimir esa diferencia en las urnas, sino de forma turbia, en tribunales, con acusaciones falsas.
3. En términos estrictamente democráticos, otro hecho salta a la vista, y es que el desafuero se haya dado en el sexenio de la alternancia. El siglo XX mexicano, dominado por el PRI en un régimen donde las elecciones eran principalmente una simulación y no se respetaban sus reglas básicas de equidad; las trampas y el acoso a los opositores y adversarios ideológicos eran frecuentes. Pero el triunfo de Vicente Fox, que llevó al PRI a su primera derrota electoral en la historia, suponía un tránsito hacia un régimen donde dichas acciones ilegítimas quedaran olvidadas. El desafuero era, por ende, una reproducción de esas prácticas caducas, lo que se agravaba por el hecho de que ahora las ejercían los beneficiarios de la democracia: el PAN.





El desafuero marcó de forma indeleble la historia reciente del país, pues puso en entredicho el proceso democratizador mexicano y, asimismo, puso de relieve una disputa ideológica: refrendar la continuidad de la inercia neoliberal o la posibilidad de llevar al gobierno un proyecto reformista en las elecciones de 2006. Un sector ciudadano, movilizado al fragor del desafuero, aprovechó ese impulso organizado para hacer frente al tema de fondo: la elección de 2006, enarbolando la candidatura de AMLO.

De este modo, esa organización civil, politizada pero apartidista (o sin enlaces permanentes ni militancia en los partidos políticos) que se movilizó contra el desafuero por razones democráticas y que asimismo miraba a AMLO como el gestor de una candidatura reformista con la que simpatizaban, sería la génesis del Movimiento Regeneración Nacional.

LA RESACA DEL DESAFUERO: LA ELECCIÓN DE 2006

El mes de abril de 2005 significó el fin del desafuero jurídico contra AMLO, pero el conflicto azuzado por Fox se mantuvo ahora en otra dimensión, meramente política, en el ciclo que se abrió: el de la elección presidencial de 2006. López Obrador, una vez sorteado el juicio de procedencia, pidió licencia a su cargo como Jefe de Gobierno y al poco tiempo se convirtió en el candidato presidencial de una coalición cercana a las izquierdas, llamada Coalición Por el Bien de Todos (CPBT), formada por su partido, el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia.





A pesar de que el tabasqueño tenía una posición cómoda en las encuestas, y tras el desafuero se había confirmado su preeminencia en ellas, su candidatura no estaba exenta de vicisitudes. Al interior de su partido, el ingeniero Cárdenas, a pesar de su participación contra el desafuero, expresó su intención de ser aspirante y reservas sobre el proyecto del tabasqueño. El EZLN alertó que no participaría en elecciones, sino que visibilizaría a los sectores marginados a través de la movilización social, y el subcomandante Marcos emitía duras críticas a AMLO.

Este por su parte, desoía las críticas provenientes de otras izquierdas y se centró en confirmar la necesidad de un cambio de modelo económico y priorizar a los pobres en la agenda de su posible gobierno. Asimismo, provenientes de otros partidos, se sumaron a su proyecto diversos políticos, algunos de los cuales habían insinuado coincidencias con AMLO desde los tiempos del desafuero.

A pesar de esa sumatoria, de su posición privilegiada en las encuestas y de que sus adversarios principales en la contienda (Felipe Calderón del PAN y Roberto Madrazo del PRI) no gozaban de la misma aceptación social, la candidatura de AMLO tenía su mayor debilidad en la escasa estructura de los partidos que lo postulaban.

A la par de ello, a contracorriente del desafuero, se había generado un significativo sector ciudadano que de manera apartidista se introdujo en la política del país por la vía de la resistencia pacífica y la identificación con el tabasqueño. Una parte de ese fuerte influjo social mantuvo su activismo, pero ahora a favor de la campaña presidencial de AMLO, sin necesariamente ser simpatizantes de partido alguno.

Así como los círculos de estudio en los albores de 2005 se abocaron a difundir información y generar conciencia sobre el desafuero, una vez superado ese episodio enfocaron su esfuerzo al análisis sobre la elección de 2006 y apoyar electoralmente a López Obrador. Para suplir las carencias organizativas y de estructura de los partidos que abanderaron a AMLO, se intentó crear una fuerza política, sustentada en ese cúmulo ciudadano, que se dedicara a labores propias de campaña: promover el voto y –más importante– generar estructura de conteo y vigilancia electoral para el día de los comicios.





De ahí nació la figura de las “Redes ciudadanas” que, en los hechos, fue una estructura paralela a la de los partidos, aunque conectada con estos, con presencia fluctuante en todo el país y coordinada regionalmente por políticos del equipo cercano a AMLO. Si bien su participación y resultados en esa elección fueron modestos (dada su inexperiencia y coordinación zigzagueante con los partidos políticos registrados), dejaba en claro que había un importante sector social que, sin militancia partidista, simpatizaba lo suficiente con el proyecto político reformista que AMLO propuso como para tomar una participación voluntaria y más o menos activa en la coyuntura comicial.

El desarrollo de la campaña fue tal y como su preámbulo del desafuero: polarizante y hostil. López Obrador centró su discurso en la necesidad de un viraje de modelo económico y sus adversarios en un principio emitían propuestas que no captaban la atención pública.

Sin embargo, a fines de febrero de 2006, Felipe Calderón y el PAN comenzaron una campaña furibunda de ataques contra el candidato puntero, a quien acusaban de intolerancia, de irresponsabilidad financiera y, finalmente, de ser “un peligro para México”. Esta propaganda de miedo, de una magnitud sin precedentes, se vio reforzada por la intromisión ilegal de Vicente Fox, quien invertía una cantidad enorme de recursos públicos para promover su gobierno e indirectamente hacer campaña por el PAN, todo ello acompañado de declaraciones diarias y a toda hora donde instaba a los mexicanos a “no cambiar de modelo económico” y a alertar sobre “los peligros del populismo”.

A pesar de que la ley electoral era muy clara en ambos sentidos, y marcaba prohibiciones expresas a la propaganda sucia y a la intromisión presidencial, el Instituto Federal Electoral actuó de forma parsimoniosa y omisa, al no sancionar ni res-



tringir ese tipo de mensajes y, en cambio, sí hacerlo cuando iban en sentido contrario.

Asimismo, diversos periodistas documentaron desvíos de recursos públicos y logísticos para beneficio del candidato panista (el periodista José Reveles documentó la creación “al vapor” de varias empresas fantasma ligadas al PAN cuya intención era movilizar dinero del erario a su favor), y, a tono con el discurso del miedo del PAN, el resto de los contendientes a la presidencia plantearon también la candidatura de López Obrador como “un riesgo” o “un peligro”.

En otra violación a la ley electoral, que con claridad prohibía la participación de actores ajenos a la contienda en la promoción de candidatos, integrantes de las élites económicas, cercanas o favorecidas por el gobierno de Fox, como el Consejo Coordinador Empresarial, hicieron una intensa, cara y larga campaña propagandística en diversos medios, donde instaban a los mexicanos a optar por la continuidad del modelo neoliberal y no apostar a otra cosa porque sería “un retroceso”. La investigadora Florence Toussaint, en un análisis sobre las campañas de ese año, demostró que Calderón rebasó los topes al respecto, sin considerar el contenido deliberadamente mentiroso y antidemocrático de la misma.



En términos de propaganda, el discurso rebasó la estrategia del miedo y se llegó incluso a la promoción del odio. Mediante cuentas anónimas de internet y membretes fantasma, alentados incluso desde instituciones públicas, se distribuían panfletos con información mentirosa para atacar a AMLO, y en la televisión se le hacía un escarnio basado en calumnias. Otros candidatos también abonaban a la tensión con ataques dirigidos al aspirante de la Coalición por el Bien de Todos. La in-



versión de propaganda política en contra del tabasqueño llegó a puntos extremos, incluso con llamados anónimos al magnicidio, y por su tamaño y gasto no tenían precedente en la historia del país.

El clima de linchamiento mediático contra AMLO en el desafuero permanecía, al igual que la intromisión ilegal y antidemocrática de Fox en contra del tabasqueño. En vez de ser una contienda equitativa, sustentada en estrategias legales, la de 2006 parecía más bien una resaca del contexto ilegítimo y turbio del desafuero de 2005.

Con ese ambiente, el día de la elección, luego de que la ciudadanía salió a votar, el IFE declaró que la contienda era cerrada y no podía dar un ganador, pero al poco tiempo declaró a Felipe Calderón como el contendiente con más votos. Sin embargo, fluyeron muchas irregularidades ocurridas el día de los comicios. En el Programa de Resultados Preliminares (PREP) diversos científicos y analistas detectaron inconsistencias graves, como el hecho de que ante una elección sumamente cerrada, nunca hubo “cruces” en la delantera del conteo, y casillas contadas donde el número de votos de los aspirantes no correspondía al que se publicaba en actas, error que favorecía siempre al panista, a la par de un sinnúmero de *mapacherías* electorales: inflado de urnas, votos perdidos, encuentro de boletas robadas, anulación injusta de votos, etcétera, todo ello con sesgo a favor del PAN.

La estructura de vigilancia de la Coalición Por el Bien de Todos y la de las Redes Ciudadanas no cumplió con la meta de tener presencia en cien por ciento de las casillas, pero aun así recabaron información suficiente para mostrar irregularidades en el proceso, con las que impugnaron la elección.

La situación era delicada e inesperada. Aun cuando en medios y desde el gobierno de Fox se instaba a “acatar los resultados”, la evidencia de turbiedades, sumada a lo desprolijo y ventajoso que fue el proceso a favor de Calderón, motivaba a que un número amplio de mexicanos dudara de los resultados. Sin mucha claridad estratégica, dado lo inédito del escenario, pero con estos elementos como base, sobrevino una nueva etapa de activismo político, ahora con la intención de denunciar las irregularidades del proceso electoral y tratar de sanearla.



LA RESISTENCIA POSELECTORAL

Nuevamente el clima político mexicano era de alta tensión. La Coalición por el Bien de Todos y varios ciudadanos expusieron que la elección, desde un principio, se había llevado a cabo en un clima desigual donde imperaron las intromisiones ilegales y el empleo de recursos de forma ilegítima para perjudicar a AMLO. Aparte de ello, a Calderón se le declaró ganador con un margen estrecho, que se ponía en entredicho dado que las irregularidades detectadas

en actas eran mucho mayores a la diferencia de votos con la que presuntamente había ganado.

Con base en esos argumentos, la Coalición impugnó la elección, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de reconocer anomalías y de disminuir la ventaja del panista a través de un recuento parcial, ratificó al aspirante blanquiazul. En ese proceso jurídico se revivió el activismo visible en el país de los simpatizantes de AMLO, que una vez más, a través de diversas acciones colectivas, manifestaba

su inconformidad ante la negligencia del IFE y su denuncia de las irregularidades de la elección.

La más notoria de esas acciones fue una marcha multitudinaria de dos millones de personas el 30 de julio de 2006 (cifra que, de nuevo, rebasaba la capacidad organizativa de los partidos políticos) y que devino en la instalación de un plantón en una de las arterias principales de la Capital: la avenida Reforma.

Más allá del resultado electoral y de la actuación del Tribunal, el llamado "plantón de Reforma" que se extendió por casi cincuenta días, fue una válvu-





la de escape social que al principio exigía sanear la elección, su anulación al notar el nivel de ilegalidades y, finalmente, impedir la asunción de Calderón. Con presencia itinerante tanto de militantes de partidos como de ciudadanos apartidistas, el plantón se tornó en un espacio de socialización política, pues ahí se difundía, a través de folletos, fotocopias, pancartas, carteles, medios caseros, una variedad de información no solo relativa a las iniquidades de la contienda electoral, sino también a temas histórico-políticos más allá de esa coyuntura.

El plantón de Reforma tuvo un costo político alto, pues dio pábulo a que los adversarios de AMLO centraran su crítica en que este “no respetaba el resultado de la elección” y “amenazaba la economía del país” al “bloquear” y “secuestrar” una importante vía. Empero, detrás del plantón, de acuerdo con sus integrantes, había un intento de sobrellevar por cauces pacíficos un muy fuerte descontento social.

A través de diversas vías (creaciones artísticas, monólogos, mesas de diálogo, conferencias con periodistas y especialistas, literatura, hojas volantes, periódicos caseros, etcétera) en el plantón se exponían temáticas diversas: las carencias y crisis del modelo neoliberal; la historia de México desde una perspectiva crítica, la situación de los partidos políticos, las características de las derechas e izquierdas en el país, enfoque de género, entre muchos otros temas. Asimismo, era un incipiente espacio de concientización y creación de ciudadanía, pues se realizaron talleres sobre derechos humanos, ambientalismo, respeto a minorías sexuales, creación de productos autogestivos, etcétera.





En síntesis, el periodo de activismo poselectoral, abrevado en el plantón, con todo y sus desavenencias y espontaneidad, fue un espacio que, al mismo tiempo, exponía las ilegalidades electorales e iba creando cierta identidad ideológica. A pesar de sus contradicciones internas (presentes en toda postura política) ese sector social se hacía visible para presionar al Tribunal y darle una salida justa a un proceso que esa propia institución reconocía no exento de desaseos. Sin embargo,

luego de su fallo a favor del panista, ese sector movilizado parecía no tener un objetivo claro, a pesar de que había demostrado ya contar con una presencia y número considerables

LA CONVENCION NACIONAL DEMOCRÁTICA Y EL GOBIERNO LEGÍTIMO: VÍAS PARA SUPERAR LA ESPONTANEIDAD

Las razones de la resistencia poselectoral eran variadas: una elección que se contaminó irremediabilmente primero con una chicana judicial como el desafuero, y luego con una contienda donde no se respetaron los ejes rectores de una elección limpia y abundaron las ilegalidades. Asimismo, una jornada electoral con un número de inconsistencias sesgadas a favor del candidato panista, que pese a recibir votos ilegales, anulación injusta de votos a AMLO, recursos materiales, monetarios y logísticos ilegítimos (tanto del presidente Fox como de otros actores ajenos a la contienda), oficialmente solo había ganado por menos de un punto porcentual (0.56 por ciento),



pues el dictamen del TEPJF le reconoció 15 000 284 votos, frente a 14 756 350 de AMLO.

Dados los recursos excesivos e ilegales invertidos, la participación ilegítima y delictiva del presidente en el proceso, y sobre todo las irregularidades el día de la votación, había motivos para pensar que la elección había sido, en el peor de los escenarios, un fraude, o en todo caso, una elección de Estado donde no había un ganador legítimo.

Durante el régimen autoritario del PRI, el fraude y el hostigamiento a los opositores políticos fueron una constante, de tal suerte que una elección nebulosa o fraudulenta no eran un hecho nuevo en México. Ya en 1988, con la elección de Carlos Salinas, se había padecido un escenario parecido, ante el que Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato perjudicado, optó por encaminar la resistencia hacia la formación de un nuevo partido político.

Sin embargo, en 2006 había una diferencia significativa: se trataba de una coyuntura posterior a la presunta transición democrática, por lo que las reglas electorales, y los garantes de cuidarlas, debían actuar con mayor prudencia. Al nombrar presidente electo al panista, el Tribunal desechaba así las válidas razones de la Coalición, que ahora enfrentaba un camino inexplorado.

HACIA LA FORMALIZACIÓN DE LA PRESENCIA TERRITORIAL

La declaración del triunfo de Calderón por parte del TEPJF, en septiembre de 2006, dio paso a un período borrascoso para el país. Las acciones de resistencia seguían en las calles y en las instituciones se empezaba a conformar un polo legislativo: el





Frente Amplio Progresista, FAP, integrado por el PRD, PT y Convergencia, muchos de cuyos integrantes buscaban impedir la toma de protesta del panista.

López Obrador convocó a una Convención Nacional Democrática (CND) para el 16 de septiembre, donde se decidiría si el excandidato presidencial debía erigirse en líder de la resistencia política o proclamarse “Presidente legítimo de México”, opción que al final de cuentas se aprobó de forma mayoritaria.

La CND fue numerosa, rebasó al millón de asistentes, y al nombrar a AMLO como “Presidente legítimo” adoptó una figura de resistencia que no era nueva en México, pues ya la había empleado el PAN en 1989 para denunciar trampas electorales del tricolor. Las tareas del Gobierno Legítimo corrían en tres vertientes: la primera era la denuncia pública, es decir, mantener vigente el recordatorio de que la elección de 2006 había sido fraudulenta y el gobernante emanado de ella un “un usurpador”. En segunda instancia, estableció un mecanismo de registro formal de simpatizantes, para la creación de una eventual organización con presencia territorial y una interlocución directa entre esos militantes y la dirigencia del movimiento. Y, por último, realizó una declaración de diversas demandas políticas vinculadas al proyecto de Nación enarbolado por AMLO en 2006, entre otras:

- Defender el derecho a la información
- Renovación de las instituciones públicas
- Combate a la corrupción y tráfico de influencias en los poderes de la Unión
- Implementar austeridad republicana
- Menos impuestos a las mayorías y desaparecer privilegios fiscales
- Protección al consumidor y fin a los cobros excesivos
- Investigar desfalcos, como el Fobaproa
- Proteger a los productores nacionales ante la apertura comercial
- Protección legal a trabajadores informales
- Oposición tajante a la privatización del sector energético

AMLO fue investido “Presidente legítimo” el 20 de noviembre y, a continuación, realizó el nombramiento de un simbólico “Gabinete a la sombra”, cuyos





integrantes fueron en su mayoría especialistas y ex colaboradores suyos en el Gobierno capitalino, como Claudia Sheinbaum, José Agustín Ortiz Pinchetti, Bertha Luján, Luis Linares y Raquel Sosa, entre otros. Más allá de su simbólica figura de funcionarios “legítimos”, estos personajes tendrían la tarea primordial de denunciar las oquedades del gobierno calderonista, recordar su origen ilegítimo y generar propuestas alternativas para la resolución de los problemas nacionales.

De este modo, mediante la integración de un frente legislativo para impulsar las propuestas de la Coalición, y la construcción de una incipiente figura de resistencia con presencia territorial, como el “Gobierno Legítimo” y sus simpatizantes afiliados, AMLO encabezaba un movimiento que transitaba por dos vías: llamar a la movilización social y acciones colectivas –como la Convención Nacional Democrática– con miras a denunciar el origen ilegítimo de Calderón, pero también aprovechaba espacios institucionales para influir en el proceso de decisiones legislativas.

Dentro de sus objetivos estaba también el impedimento de que Calderón tomara posesión y llevar a cabo acciones pacíficas de denuncia (protestas simbólicas en los actos donde estuvieran presentes Fox o Calderón, instar a no consumir productos de las empresas que apoyaron al candidato panista, difundir información sobre el fraude, etcétera). Sin embargo, pese a las protestas de legisladores del FAP, el primero de diciembre de 2006, en una sesión dudosa donde el protagonista entró por la puerta trasera, Calderón tomó posesión y se consumó la elección viciada. El “Gobierno Legítimo” y el FAP tendrían la tarea de ejercer el papel de fuerza impugnadora contra el gobierno Calderonista en dos vías: tanto en las instituciones como fuera de ellas, amparados en el argumento de que el panista carecía de la legitimidad de las urnas.

EL MOVIMIENTO LIDERADO POR AMLO, UN *PARTIDO SIN REGISTRO QUE HIZO FRENTE AL SEXENIO DE CALDERÓN*

Luego de dos años de activismo político poco organizado, espontáneo y en algunos casos disperso, el “Gobierno Legítimo” parecía encaminarse con más



formalidad hacia una estructura ciudadana registrada. Empezaron a instalar módulos de afiliación en plazas públicas de todo el país, con presencia regular en días fijos, y que, como indicaba la “carta compromiso” de afiliación, buscaría construir un Estado de bienestar desde la oposición “no leal” (recordando la ilegitimidad de la elección de 2006) y una fuerza de resistencia ante el gobierno de Calderón.

De manera muy lenta, y a veces con un padrón de afiliados poco fiable, el “Gobierno Legítimo” empezó sus tareas de socialización política con recursos precarios (provenientes de donativos de sus propios militantes o de apoyos en especie de integrantes del FAP) y con pocos voluntarios para realizar las labores de afiliación y difusión. López Obrador inició el sexenio de Calderón secundando la acción del Gobierno Legítimo, mediante recorridos por todo el país, iniciativa que lo llevaría pronto a ser el único político mexicano en haber visitado todos los municipios de México, muchos de ellos más de una vez.

Poco a poco el “Gobierno Legítimo” comenzó a tener presencia territorial: con módulos en prácticamente todos los estados del país, que parecían resarcir

las ausencias estructurales del PRD, PT y Convergencia. En estas sedes, los voluntarios instaban a la afiliación, difundían información cara a cara desde una óptica progresista y promovían la oposición al gobierno de Calderón.

Aunque la administración de dichos espacios a veces estaba en manos de los partidos o personas vinculados a integrantes del FAP, la socialización política, en lo esencial, la realizaban ciudadanos simpatizantes, no políticos profesionales, que dedicaban parte de su tiempo libre a esa labor.





Dicha gama ciudadana era amplia y diversa, abundaban en ella jubilados, docentes de educación básica, profesionistas, personas pensionadas, adultos mayores y jóvenes. En algunos casos, pequeños colectivos (de mujeres trabajadoras, profesionistas, activistas) se acercaban a afiliarse y a participar en tareas básicas del movimiento político.

Temas como la Reforma electoral de 2007, el intento de disminuir recursos a la UNAM, los personajes cuestionables en el gabinete calderonista, la información sobre los delitos electorales realizados contra AMLO, se difundían desde una perspectiva crítica. Sin embargo, hubo dos temas que formaron el eje rector de los posicionamientos del “Gobierno Legítimo” a partir de 2007: la estrategia de “Guerra contra el narco” de Felipe Calderón y su intento de reforma energética en 2008.

La “guerra” emprendida por el Gobierno Federal consistió en un presunto ataque frontal a los cárteles de las drogas, con el ejército mexicano haciendo labores policiales y ponderando la represión por encima de las labores discretas, la educación y la generación de empleo para disminuir la inseguridad en México.

Esta “guerra”, en los hechos, aumentó la inseguridad y sumió al país en una escalada de violencia sin precedentes, que años tras año de ese sexenio empeoró. Diversos investigadores y periodistas hicieron públicas las aristas invisibles de esa “guerra”: la corrupción e infiltración que padecían el ejército y los cuerpos de policía que debían combatir al crimen organizado; la injerencia indebida de los Estados Unidos, la ausencia de una perspectiva que viera a los adictos como farmacodependientes, las pésimas condiciones de las autoridades municipales y estatales para hacer frente a la inseguridad, etcétera.





Sin embargo, el problema mayor fue denunciado por múltiples voces: en México se hicieron públicos innumerables e indecibles hechos violentos. El dolor social fue inenarrable, ante una sociedad que hacía frente tanto a grupos delictivos como a cuerpos de seguridad corrompidos o mal preparados.

Dicha "guerra" influiría, poco a poco, en que el movimiento encabezado por AMLO diera relevancia a la noción de que la transformación educativa y un nuevo impulso económico –y no la represión–, son las claves para revertir el problema de inseguridad en México. Si bien esa

acción belicista fue la que marcó al sexenio de Calderón, en sus albores se vivió un episodio que vertebraría la identidad ideológica del Movimiento liderado por López Obrador y sería determinante para la futura conformación de Morena.

El segundo sexenio panista se inauguró con esa estrategia represiva, mientras que en el plano económico el gobierno se alistaba para profundizar el esquema neoliberal, colocando en puestos estratégicos del gabinete personajes identificados con esa tendencia y aplicando medidas determinantes en ese sentido, como la reforma a la ley del ISSSTE.

En fines de 2007 y principios de 2008, dos hechos fueron primordiales en la agenda pública: Felipe Calderón nombró Secretario de Gobernación a Juan Camilo Mouriño y, casi al mismo tiempo, comenzó una campaña mediática para persuadir a los mexicanos de la bondad de una eventual reforma constitucional que permitiera la participación privada en el sector energético, iniciativa que Calderón lanzó a principios de 2008.



Ambos elementos, dada su trascendencia, dieron una articulación ideológica sólida a los militantes y simpatizantes del Gobierno Legítimo. Investigaciones periodísticas denunciaron la trayectoria de Mouriño, cuya familia tenía gasolineras y contratos en Pemex, obtenidos cuando él colaboraba con Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, lo que apuntaba a un posible tráfico de influencias.

Asimismo, la reforma propuesta a los artículos 27 y 28 constitucionales constituyó un acto de alerta. Tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales y la privatización de las empresas públicas acaecida desde los años ochenta en México, la industria energética –primordialmente Pemex– a pesar de sus desavenencias y el abandono oficial, persistía como un sector vital bajo la rectoría del Estado.

A lo largo del ascenso neoliberal, y a tono con la tradición antimperialista de las izquierdas en América Latina durante el siglo XX (fortalecida en los movimientos anticolonialistas de los años sesenta), la defensa de los recursos naturales y la rectoría del Estado en sectores estratégicos, como el energético, fue una bandera identitaria de los idearios progresistas en diversos países. Ese nacionalismo constructivo, como lo llaman varios autores, no nació de una xenofobia o conservadurismo, sino –acorde a la historia– de la intención que los réditos de estos recursos no terminen beneficiando a élites foráneas sino a los países que los tienen. Se trata, pues, de oposición a una inercia colonialista. De ahí que en los principios de muchos partidos políticos identificados con ese ideario –como fue originalmente el PRD– se estableciera una oposición frontal a todo intento de privatización de ese sector.

En el movimiento encabezado por AMLO, esta oposición se convirtió en una cuestión central y alrededor de ella se reeditaron el activismo y las acciones colectivas contra la iniciativa de reforma energética, que el Gobierno federal propuso en abril de 2008, misma que, en efecto, pretendía la modificar los artículos 27 y 28 constitucionales para dar a privados concesiones en materia de extracción petrolera y en el transporte y distribución de energéticos, entre otras actividades reservadas hasta entonces al dominio de la Nación.

La reacción del movimiento liderado por AMLO fue un contundente rechazo, que corrió por dos vías:





1. *En el plano de la denuncia pública* se hizo saber que en México los casos de funcionarios que amasaban su fortuna con presumible tráfico de influencias, como Juan Camilo Mouriño, eran constantes y evidenciaron que muchos integrantes de la élite gobernante se valían de los recursos nacionales e instituciones públicas para generar fortunas privadas. Una reforma privatizadora podría significar que esto se normalizara.
2. *En el plano ideológico* se defendía la rectoría del Estado, la soberanía nacional y el legado de la expropiación petrolera encabezada por Lázaro Cárdenas en 1938. En suma, defender los principios rectores de la Constitución política de 1917.

La militancia del movimiento, representada en los registros de simpatizantes del “Gobierno Legítimo”, volvió a realizar acciones colectivas: concentraciones públicas, mítines, difusión de información cara a cara y efervescencia en sus incipientes comités territoriales, mientras tanto López Obrador y su equipo recorrían el país alertando sobre la privatización energética.

Las acciones colectivas tenían como objetivo principal presionar a los senadores y diputados a rechazar la iniciativa calderonista y respetar el texto constitucional, a la par que organizar un foro de discusión política y una consulta pública a ese respecto. En los recintos legislativos, el Frente Amplio Progresista secundaba mayoritariamente esta idea, al tiempo que diversos intelectuales, analistas y periodistas participaban en el debate público sobre el tema.

Esa movilización creó un clima de debate y politización parecido al del desafuero tres años atrás. Los militantes convocaron a la “organización de brigadas de información” casa por casa, empleando materiales provistos por académicos identificados con el movimiento y con propuestas e ideas generados por los comités del propio “Gobierno Legítimo”, cuyos integrantes engrosaron las brigadas y participaron en las acciones colectivas.

Las mujeres, una vez más, jugaron un papel notable en la participación política del Movimiento, pues dada su presencia mayoritaria en las protestas públicas y acciones colectivas y otros actos simbólicos para oponerse a la reforma,





dichos grupos se autodenominaron “Las Adelitas”, donde destacaron artistas, profesionistas, maestras, etc. De ese modo, nació el “Movimiento en defensa del petróleo” para confirmar el objetivo de abrir el debate público sobre el tema energético y generar una consulta popular a ese respecto, con la intención última de rechazar la propuesta de Calderón por incompatible con la Constitución.

En la Cámara de diputados, donde llegó la iniciativa calderonista, y en diversos foros públicos, las voces afines al gobierno pretendían una aprobación pronta de la reforma y hablaban a su favor con vehemencia, mientras que desde el FAP se exigía apertura a la discusión.

En términos políticos, los resultados fueron magros pero inéditos: gracias a diversos legisladores del FAP que “tomaron la tribuna” de la Cámara de diputados –en consonancia con acciones de resistencia del Movimiento en defensa del petróleo– se evitó un “albazo” y un “mayoriteo” legislativo y se logró por vez primera en el recinto senatorial organizar un amplio debate, donde participaron no solo legisladores o políticos profesionales, sino también especialistas, técnicos y académicos convocados por los partidos.

Con ese esfuerzo se creó, por convocatoria de algunos integrantes del “Gobierno Legítimo”, como el periodista Jesús Ramírez Cuevas, un “Comité de intelectuales en defensa del petróleo”, que aportó un sinnúmero de ideas no solo para argumentar en contra de la privatización propuesta por Calderón, sino también para proponer una reforma energética que respetara la rectoría del Estado y que liberara a Pemex de la corrupción que la aquejaba y de la carga impositiva que padecía. En ese tenor, sobresalieron personajes como Elena Poniatowska, Ifigenia Martínez, Fernanda Campa, Luis Javier Garrido y Claudia Sheinbaum, entre otros.

Los espacios de socialización política del “Gobierno Legítimo” (comités, círculos de estudio, conferencias rutinarias en espacios públicos) se centraron en un punto de quiebre: el tema del petróleo adquirió un rol preeminente y distintivo de identidad ideológica. El material informativo que esa coyuntura produjo fue amplio y enfatizaba la Expropiación Petrolera de 1938, la refundación del Estado en ese año, la importancia de Pemex para el presupuesto y patrimonio públicos, la vulnerabilidad y saqueo padecidos por la paraestatal desde la dé-





cada de los ochenta, los negocios privados de muchos políticos al amparo de la riqueza nacional, etcétera.

En suma, ese período determinó una impronta ideológica definitoria para el Movimiento, que con la oposición a la privatización energética mostró su rechazo a uno de los argumentos centrales del neoliberalismo y ponderó los recursos energéticos del país como palanca del desarrollo del país, retomando la herencia ideológica del cardenismo en un plano acorde con la izquierda latinoamericana que, con raíces en las experiencias independentistas del siglo XIX y anti-colonialistas del siglo XX asumía los recursos estratégicos como piedra angular del desarrollo.

No obstante que los resultados de las acciones colectivas del “Movimiento en Defensa del petróleo” fueron modestos, lograron rechazar una votación prematura en el Congreso, abrieron el debate en el plano institucional, organizaron una consulta pública y al final achataron algunos ángulos privatizadores de la Reforma, aunque esta finalmente se aprobó, con la complacencia de la corriente Nueva Izquierda del PRD.

Por otro lado, en términos políticos, esa coyuntura proporcionó al Movimiento una vertebración ideológica en favor de la herencia de Lázaro Cárdenas en la administración de la riqueza pública. Los comités del “Gobierno Legítimo” apelaron a la resistencia civil pacífica y –a pesar que evidenciaron una discrepancia preocupante entre el padrón de afiliados (que ya era de dos millones) y la militancia dispuesta a participar (que no llegaba a esa cifra)– mostraron que esa militancia efectiva bastaba para hacer presencia en buena parte del país y tenía fuerza simbólica suficiente para llevar a cabo acciones colectivas de peso, como demostró la copiosa participación en la citada consulta y en los brigadeos informativos. En suma, pese a su gestación incipiente, esa estructura militante parecía tener mayores alcances que la de los partidos del FAP con los que se vinculaba.

La reforma energética propuesta por Calderón tuvo una relevancia política total. Reveló la intención de modificar un aspecto histórico que las izquierdas mexicanas consideran no negociable, como el respeto al legado cardenista y a la constitución mexicana. En los albores del siglo XXI, la defensa del patri-





monio nacional y el rechazo a la privatización de los bienes públicos de carácter estratégico es una característica prácticamente definitoria de las izquierdas contemporáneas en América Latina, dada la historia colonial padecida por la región durante siglos, incluso con posterioridad a sus procesos independentistas, donde nuevos actores –ya no naciones imperialistas en sí mismas, sino intereses económicos globales– habían ejercido influencia y aprovechamiento de dichos recursos en beneficio no de los países propietarios de ellos sino de élites foráneas.



Ello, en buena medida, explicaba la resistencia contra la propuesta calderonista. El Movimiento encabezado por AMLO, nacido al fragor de un proceso electoral viciado de origen, y el FAP, tenían en esa coyuntura una oportunidad de actuar de forma cohesionada, dado que la reforma propuesta por el Gobierno Federal contravenía tajantemente los principios fundacionales de los partidos integrantes de ese frente y había sido un tema fundamental en la plataforma programática propuesta por AMLO en 2006.

Es decir, parecía que esa reforma daba un pretexto inmejorable para la unidad ideológica y estratégica de las izquierdas del FAP para actuar como una oposición impugnadora y unida, ante una reforma que trastocaba uno de sus valores fundamentales. Sin embargo, la división interna en el Partido de la Revolución Democrática lo impidió, y a la larga se constituyó en una razón de peso para la futura conformación de Morena.





LA FRACTURA PERREDISTA: CONFLICTO DE 2008, ELECCIONES DE 2009 Y LAS ALIANZAS PAN-PRD

En la viciada elección de 2006 –pese a todo– el PRD llegó al cenit de su votación histórica. La influencia de López Obrador fue incuestionable en ese resultado, pues bajo su liderazgo, el PRD había logrado desde 1997 y luego en 2006 los mejores números en su historia. Incluso, su candidatura actuó como factor de unidad en un partido que, desde sus albores, había sido propenso a conflictos internos entre los grupos que lo conformaron, pugnas que llegaron a enturbiar los procesos de elección de sus dirigentes.

Sin embargo, el proceso de desafuero de AMLO había significado un momento de unidad y cohesión excepcionales en el PRD y la elección de su dirigencia nacional en 2005 fue una jornada con escasos problemas internos, donde los dos candidatos (Leonel Cota y Camilo Valenzuela) tenían como prioridad defender a López Obrador del embate foxista

Superado ese proceso y tras la elección de 2006, cierta inercia de unidad interna en el PRD, derivada del peso de su candidato presidencial en ese año y de la alianza legislativa con dos partidos de izquierda, el FAP, parecía proporcionar al Sol Azteca suficiente claridad ideológica para confrontar con firmeza al gobierno panista de Calderón, tanto en el plano institucional como en el de la resistencia cívica, dada la ilegitimidad que le achacaban.

Los resolutivos del partido en su X Congreso Nacional de 2007 indicaban esa misma tendencia, pues en ellos se ratificaba, entre otras cuestiones, que: a) Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en la elección de 2006, b) Felipe Calderón era un presidente ilegítimo emanado de un fraude, c) se avalaban las acciones de resistencia civil emanadas de la Convención Nacional Democrática y la obligación de hacer cuanto fuera necesario para defender el patrimonio nacional, fundamentalmente el sector energético.

Las directrices del PRD en su máximo órgano dirigente parecían coincidir a plenitud con el Movimiento encabezado por AMLO. Sin embargo, esa coin-





cidencia fue solo en las palabras, pues en los hechos se manifestaron señales incipientes de fractura.

En 2007 se avaló en la Cámara de Diputados una nueva reforma electoral, votada por todos los partidos, que, fundamentalmente, prohibía la participación de terceros en la compra de espacios propagandísticos en tiempos de campaña y quitaba a los partidos la oportunidad de engordar los bolsillos de las televisoras. Asimismo, esa reforma implicó la salida escalonada de los consejeros del IFE y prohibió las donaciones a candidatos en campaña.

Dicho de otro modo, esa reforma reconocía implícitamente que en la campaña de 2006 hubo turbiedades, omisiones y hechos indeseables, pues la nueva legalidad buscaba subsanar las fallas de la autoridad electoral en la materia.

Durante ese proceso, el FAP mostró discrepancias internas, pues algunos dirigentes de Nueva Izquierda (NI) sugerían la posibilidad de aprovechar la nueva institucionalidad para convertirse en un “amplio partido opositor”, mientras que otros perredistas, identificados con los resolutivos de la CND, rechazaban la idea por considerar que ello significaría tornarse en una “oposición leal” que –en los hechos– terminaría legitimando a Felipe Calderón.

Esa falta de cohesión en la tesis de *qué actitud asumir* ante Calderón sería el punto central del conflicto interno del PRD en 2008, motivado tanto por la actitud negociadora de un sector del partido ante la Reforma energética y la elección para renovar la dirigencia del Sol Azteca en ese año.

La reforma energética propuesta por Felipe Calderón parecía ameritar una oposición firme y sin concesiones de las izquierdas. Sin embargo, grupos perredistas, identificados con NI, se desentendieron de dicha estrategia de resistencia, se ausentaron en varias concentraciones públicas y no participaron en los actos simbólicos de protesta que llevaron a cabo otros legisladores del FAP, como la toma de tribuna que impedía un albazo legislativo y exigía que se discutiera a profundidad una reforma de gran calado.

Parecía que NI no quería atender los resolutivos del Congreso Nacional (que obligaban a secundar las acciones de resistencia pacífica) ni sus principios ideológicos fundacionales, donde la defensa de la rectoría del Estado es un tema indiscutible. Detrás de ello, parecía haber un ánimo negociador de ese sector



del Sol Azteca con el gobierno de Felipe Calderón. Ello generó una cauda de críticas del Movimiento a la actitud displicente de Nueva Izquierda.

Al final, el Movimiento en Defensa del Petróleo no logró su cometido de rechazar la propuesta calderonista y votar una alternativa propia, pero sí abrió la discusión y debilitó el vértice privatizador de la misma. Sin embargo, un sector del PRD, vinculado a NI, no se cohesionó con el resto del FAP y transigió inexplicablemente para aprobar una reforma que –aunque disminuida– debieron rechazar, en congruencia con sus principios y estatutos.

Esa reforma en 2008 no fue el único motivo de discrepancias en el PRD. La elección de la dirigencia de ese partido se dio durante el contexto de la reforma energética, en marzo de ese año. Los dos principales contendientes parecían declarar la disyuntiva del partido: asumirse como una organización vinculada estrechamente con el movimiento político emanado de la elección de 2006,

o cambiar de estrategia para tornarse en un partido propenso negociar con el gobierno calderonista. Dichos candidatos fueron Alejandro Encinas, cercano a AMLO, y Jesús Ortega, líder de Nueva Izquierda.

Desde fines de los años noventa, las elecciones perredistas daban pábulo al conflicto, no tanto por motivos ideológicos sino por la disputa de posiciones entre corrientes internas del partido. Sin embargo, la elección de 2008 rebasó los límites. En una jornada desaseada, donde permearon las acusaciones de prácticas antidemocráticas –sobre todo a favor de Ortega–, el Comité Técnico Electoral del partido no pudo declarar un ganador de la elección, debi-





do a las vicisitudes de la votación y a que muchas casillas se debieron anular debido a las irregularidades y trampas.

En medio de impugnaciones y guerra de cifras, la autoridad electoral perredista declaró ganador a Encinas, candidato apoyado públicamente por AMLO y a quien habían favorecido las encuestas previas a la votación.

Parecía que, pese a las prácticas fraudulentas, y el control que tenía de la estructura burocrática del partido, Nueva Izquierda no lograba obtener la dirigencia de este. El lodazal electoral, sin embargo, fue ventilado por los medios y denunciado por los propios perredistas: sabotaje de casillas, introducción de votos ilegítimos, posible participación de gobernadores priistas a favor de Ortega, entre otras cosas.

El tejido del partido se hacía añicos y el desaseo electoral fue una fuente de severas críticas mediáticas. Las encuestas reflejaban que ese conflicto interno había acrecentado el rechazo ciudadano al PRD, incluso en mayor grado que el período de protestas poselectorales de 2006. Con escasa autoridad moral a cuestas, Jesús Ortega impugnó el resultado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esa decisión no solo era una incongruencia política (porque el propio PRD y Ortega habían descalificado al TEPJF por su actuación en 2006) sino que rompía con los lineamientos del partido, cuyo marco estatutario definía que en caso de haber irregularidades en más del 20% de las casillas debía repetirse la elección.

La intromisión del Tribunal no fue afortunada: revirtió los saneos hechos por las instancias perredistas, ignoró las iniquidades de Ortega y Nueva Izquierda (que, para entonces, aprovechando su control burocrático del partido habían nombrado a uno de los suyos dirigente interino) y declaró triunfador a Ortega en noviembre de 2008, luego de ocho meses de pugna electoral.

Era paradójico que un candidato identificado con el movimiento liderado por AMLO perdiese a manos del TEPJF esa elección interna, dado que él, como dirigente y como candidato, había dado al PRD sus mejores resultados en la historia mientras que Ortega nunca había ganado una sola elección ni para cargos de voto popular ni para cargos internos en el partido.





La asunción de Ortega no solo debilitó al FAP, que se desmoronaría y sus partidos enfrentarían separados la elección intermedia de 2009, sino que asimismo abrió la opinión entre muchos perredistas críticos de Ortega, y entre muchos integrantes del Movimiento liderado por AMLO (entre ellos, algunos miembros del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo), *de aprovechar la incipiente fuerza del movimiento y conformar una nueva fuerza política.*

Sin embargo, López Obrador y sus colaboradores cercanos no compartían esa visión debido a que la elección de 2012 estaba cerca y tres años parecían insuficientes para crear un nuevo partido, además de que, pese a la imposición de Ortega en la cúspide del PRD, había dirigencias locales del partido afines al Movimiento y parecía viable actuar pragmáticamente con el apoyo de estas.

El primer trienio de Calderón había sido difícil y conflictivo. La “Guerra contra el narco” generó una crisis de seguridad inédita en todo el país, la crisis financiera global del 2008 puso en entredicho a México y varios escándalos sacudían al panista, el primero de ellos la acusación de que su “guerra” no solo no daba resultados, sino que había sido improvisada para legitimarse.

Dada esa cauda de negativos del Gobierno Federal, el PAN enfrentaba una coyuntura complicada en 2009. Sin embargo, las izquierdas partidistas no pudieron capitalizar dicha crisis debido a sus conflictos internos.

En los comicios de 2009, cada partido del FAP pareció ir por su propia ruta. El Movimiento apoyó candidatos del PRD afines a AMLO en algunos lugares del país, y del PT y Convergencia en otros. Con ese escenario, el PRI fue el gran ganador de la contienda y las izquierdas de la Coalición perdieron buena parte de los espacios institucionales ganados en 2006.

El conflicto entre el sector perredista afín al “Gobierno Legítimo” y el sector identificado con Nueva Izquierda se profundizó, a tal grado, que incluso se vivieron episodios singulares en ese año, como la elección de la delegación Iztapalapa, en la capital, donde a días de la jornada comicial el TEJPF, de nueva cuenta, favoreció a una candidata orteguista y arrebató la candidatura a la abanderada del PRD identificada a favor de AMLO, en un hecho insólito de la política mexicana.





Los saldos de esa elección fueron desastrosos para el PRD. Perdió su condición de segunda fuerza nacional, recibió solo un 12 por ciento de votos y perdió gubernaturas. No obstante, Convergencia (posteriormente Movimiento Ciudadano) y el Partido del Trabajo, secundando a AMLO en dicha coyuntura, abrieron espacios para que el Movimiento lograra tener presencia en recintos legislativos. Pese a ello, en el PRD no se dieron renunciadas masivas ni salidas de personajes afines al Movimiento liderado por AMLO. Pero ya se había sembrado entre ellos la idea de que podía organizarse “una nueva fuerza política”.

La crisis perredista se ahondó por otro hecho inédito. Poco después de ser impuesto como dirigente, Jesús Ortega declaró que el país vivía una fuerte crisis, producto de la impericia del PAN en el gobierno y habló de la necesidad de “crear alianzas” para revertirla. Sin embargo, tras la elección de 2009, y con muchas elecciones estatales de suma importancia en el 2010 en puerta, Ortega cambió radicalmente su discurso y habló de la necesidad de crear un “frente común” con el PAN para “sacar al PRI” de varias gubernaturas.

El esfuerzo de Ortega se centró entonces en cambiar las directrices perredistas emanadas de los congresos posteriores a 2006, que prohibían al Sol Azteca aliarse con PRI y el PAN, no solo por ser “corresponsables de la crisis mexicana al implantar el modelo neoliberal”, sino porque habían sido cómplices y perpetradores, respectivamente, de un gran fraude no solo en contra de AMLO sino del PRD y de la democracia mexicana.

Nueva Izquierda abandonó esas tesis estatutarias, olvidó asimismo el insumo de votos que había significado AMLO al partido y optó por redefinir su plataforma política para que los





órganos de dirección del PRD avalaran las alianzas electorales con el partido que los defraudó en 2006, el PAN.

La oposición del Movimiento a dichas alianzas fue firme. Criticaron que contravenía los principios perredistas y también ponía en entredicho una premisa fundamental del partido: el recordatorio de la ilegitimidad de Calderón. López Obrador amagó con su renuncia al PRD (aunque la llamó “solicitud de licencia”) en caso de darse dicho aval.

Sin embargo, Ortega porfió y operó para que el Congreso Nacional del partido en febrero de 2010 diera el “sí” a las alianzas. Los argumentos contra esta iniciativa fueron abundantes:

1. El PAN era, ante todo, un partido de derechas, en las antípodas ideológicas del PRD.
2. Aparte de ello, el PAN era el partido en el Gobierno Federal, por lo que el propio PRD lo había acusado de ser el principal responsable de la crisis del país.
3. Tras 2006, los resolutivos del PRD eran explícitamente contrarios a cualquier alianza tanto con el PRI y con el PAN, aliados neoliberales.
4. El PAN había sido el beneficiario de una elección antidemocrática y fraudulenta en 2006, en perjuicio del PRD.

Sin embargo, la dirigencia de Ortega se empeñó mediante el argumento de que urgía frenar el avance del PRI y lograr que, por fin, hubiera alternancia en los estados que tenían elecciones y en los cuales siempre había gobernado el tricolor. Sin embargo, saltaba a la vista que muchos de los posibles candidatos de dichas alianzas PAN-PRD fueran casi todos ex priistas, y no del cuño nacionalista, como la Corriente Democrática de 1986, sino militantes que apenas habían renunciado al tricolor por no haber logrado ser candidatos en ese partido.

En suma, si bien la cuestión de las alianzas PRD-PAN no era nueva (e, incluso, AMLO la había apoyado en su dirigencia nacional en el Sol Azteca en los noventa), tanto las elecciones de 2000 y 2006 cambiaron el panorama, pues ambos





episodios negaban al PAN como un aliado, lo ubicaban en el ala franca neoliberal y como un partido que incurría en el fraude electoral.

La unión electoral PAN-PRD (que, además, gozaba del visto bueno de Felipe Calderón) se concretó. La cúpula perredista abandonó así su función de partido opositor y se convertía en aliado del gobierno que le había orquestado un fraude.

Los resultados de dichas alianzas fueron magros: las candidaturas resultantes no fueron tan exitosas como se esperaba, y en algunas de ellas se postuló a personajes de pasado sumamente cuestionable, como el caso del gordillista Rafael Moreno Valle en Puebla (tiempo más tarde, esta inercia aliancista se mantuvo en el PRD y llegó al punto inverosímil de postular bajo sus siglas a viejos verdugos de perredistas, como el veracruzano Miguel Ángel Yunes en 2016, acusado de represión en contra del Sol Azteca).

Al interior del PRD, muchos legisladores emanados de sus filas y personajes históricos del partido hicieron público su rechazo a las alianzas. Algunos, incluso, renunciaron a su militancia y de nuevo, tanto en el partido como en el Movimiento, se habló sobre la posibilidad de formar una nueva organización política.

El “Gobierno Legítimo” y el Movimiento político que le daba base se hallaban ante una encrucijada: López Obrador seguía militando en el PRD, pero si su dirigencia mantenía el control de partido y persistía en su tendencia aliancista con el PAN, Nueva Izquierda podría labrar otra unión con el blanquiazul para 2012, lo que imposibilitaría a AMLO ser candidato del sol azteca.

Sin embargo, en el propio PAN tenían un límite para las alianzas: se circunscribirían al plano local y planeaban ir sin el PRD en 2012. Ello abriría la puerta para que AMLO pudiese ser aspirante presidencial de nuevo ese año, pero los canales de entendimiento con la dirigencia perredista estaban casi rotos. Debido a la inconsistencia de Jesús Ortega y aliados, que dieron la espalda al movimiento y a su principal referente político, el partido había padecido un divorcio interno sin separación.





EL NACIMIENTO DE MORENA COMO ASOCIACIÓN CIVIL Y LA PRESENCIA TERRITORIAL DE CARA A 2012

De forma paralela a los conflictos del PRD, López Obrador desempeñaba por cuenta propia su papel al frente de un Movimiento que variaba de objetivos y estrategias, y que –si bien apelaba a las acciones colectivas (propias de los movimientos sociales)– también actuaba en el marco institucional, dando apoyo a ciertos candidatos y llamando a la base a participar en elecciones.

En suma, se trataba de un *Movimiento político* emergido de una protesta preelectoral y consolidado de forma poselectoral, que se fue formalizando, con presencia territorial, poco a poco durante el sexenio de Calderón, en cuya impugnación forjó su identidad ideológica. Dicho Movimiento tuvo diversas facetas y objetivos: la resistencia contra el desafuero en 2005; las Redes Ciudadanas con la intención de promover la candidatura de AMLO y vigilar casillas; la Convención Nacional Democrática y el “Gobierno Legítimo” para tratar de sanear la elección y generar un registro de militantes, y el Movimiento en defensa del petróleo (también llamado Movimiento nacional en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional) con la intención de revertir la reforma energética de Calderón.

A pesar de la variedad de sus metas y de su espontaneidad, el Movimiento siempre mantuvo la constante de participar en elecciones; conservó también algún tipo de relación (de cooperación o cierta presencia) con partidos políticos, al tiempo que instaba al apoyo a ciertos candidatos y proyectos específicos en desdén de otros. Es decir, nunca renunciaron a la vía electoral, aunque no se limitaran a ella y eventualmente tomaran parte de acciones colectivas.

Asimismo, ese Movimiento se fue dando una identidad. Desde el desafuero se fueron abriendo espacios más o menos visibles y permanentes de difusión e información política, que variaban sus temas en función de la coyuntura del país, la cual analizaban desde una perspectiva opositora crítica, con tesis cercanas a las izquierdas.





El perfil de los expositores a quienes se invitaba a participar en estos espacios, el contenido de los materiales que se difundían y la temática que ahí se discutía, dan pistas inequívocas del ideario que estaba en construcción. Académicos, especialistas e intelectuales como Irma Sandoval, Carlos Fazio, Bertha Luján, Luis Javier Garrido, Jesús Ramírez Cuevas, Elena Poniatowska, Enrique Semo, Enrique Dussel, Jesusa Rodríguez, José Reveles, Claudia Sehinbaum, Ana Lilia Pérez, Armando Bartra, Arnaldo Córdova, Pedro Salmerón, Jenaro Villamil, Rafael Barajas, Jaime Avilés, John Ackerman, Anabel Hernández, Lorenzo Meyer, Luisa Alcalde, Alejandro Solalinde, entre muchos otros, periodistas de investigación, analistas y militantes de causas cercanas a las izquierdas, exponían e intercambiaban su visión en esos foros.

Literatura política como libros de denuncia sobre los abusos de Televisa, la oligarquía mexicana, las derechas e izquierdas en México y en el mundo, textos que analizaban la democracia mexicana o la elección de 2006, la violencia y el narco en el país, documentos sobre el legado cardenista, la importancia del petróleo en México, películas y documentales de cine independiente y de temáticas de denuncia, documentales políticos (como del cineasta Luis Mandoki), publicaciones críticas como *La Jornada*, *Proceso*, *El Chamuco*, y material gráfico de caricaturistas como Rius, Hernández, El Fisgón, Helguera, Ahumada, Rocha, Patricio, Cintia Bolio, etcétera, abundaban en dichos espacios de difusión de información.

Poco a poco esos recintos dejaron de funcionar únicamente como espacios de reflexión y extendieron sus actividades para crear una presencia territorial permanente: se crearon sedes o “casas del Movimiento” en prácticamente todos los estados de la república, donde personas voluntarias afiliaban simpatizantes, y en labor cara a cara difundían información. En los albores de 2010, el Movimiento contaba con cerca de 2500 comités territoriales en igual número de municipios del país.

Sus integrantes eran en su mayoría *militantes creyentes*, es decir, personas que estaban ahí no por un incentivo material sino por convicción, y que, pese a su inexperiencia en labores partidistas profesionales, dedicaban parte de su tiempo a ellas. De ahí que una vena fuerte del movimiento recayera en profe-





sionistas y trabajadores jubilados, personas de la tercera edad, pequeños comerciantes, profesores, campesinos y estudiantes. Asimismo, esos espacios de socialización política tenían buena interlocución y presencia de colectivos sociales. Por ejemplo, activistas organizados contra el ecocidio minero en San Luis Potosí, o activistas defensores de los ríos y contra la privatización del agua en Veracruz, colectivos protectores de migrantes, maestros organizados, etcétera. Había un proceso de formación política medianamente estructurado, que se articulaba con otras expresiones sociales.

En suma, ese Movimiento, pese a tener un abanico de objetivos y prioridades diversos debido a la coyuntura, con su participación en la vía democrática, sus sedes territoriales para movilizar el voto y su labor de socialización política, comenzó a comportarse como una especie de *partido sin registro*.

Los recorridos de AMLO por el país buscaban reforzar esta labor. Empero, la mirada del país a ras de suelo, y el observar muy de cerca las carencias en buena parte del territorio, proporcionó insumos directos para elaborar un diagnóstico de país diferente.

La “Guerra contra el narcotráfico” hacía estragos y la crisis económica afectaba severamente a la mayoría de la población. Las consecuencias de ambas, por ejemplo, repercutían en la vida cotidiana de todos los mexicanos, cuestión que para AMLO y sus colaboradores se resultó muy visible en sus visitas a las localidades más pobres. Ese recorrido, inédito en la historia de México, dio origen a dos cambios fundamentales en el proyecto de nación que AMLO había abanderado en 2006 y que diversos especialistas comenzaron a completar y modificar.

Si en 2006 el combate a la pobreza era el punto toral del proyecto, las visitas a todos los municipios del país priorizaron que, a la par de la mejora material de las condiciones de vida, era necesario impulsar una reforma del contenido educativo, que ponderara valores más solidarios. Asimismo, se manifestó la crudeza del fenómeno migratorio y los abusos extractivistas de las empresas mineras en perjuicio de las comunidades locales y el medio ambiente (como el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí). Las sedes territoriales del Movimiento, al recopilar testimonios y conocer estos casos, *se convertían poco a poco no solo*





en espacios de difusión de información sino también en receptáculos de problemas sociales.

En suma, el nuevo diagnóstico del país avizoraba las consecuencias más fuertes de la implantación del esquema neoliberal en México, tanto en el plano ideológico (el individualismo y la destrucción del sentido de comunidad) como en el aspecto material, donde se facilitaban las ganancias de empresas y pequeñas élites a costa del territorio y la contaminación desmedida.

A raíz de ello, y en consonancia con el “Comité de Intelectuales en defensa del petróleo”, a mediados del sexenio comenzó a redactarse un nuevo proyecto de nación, que ahora ponía en primer lugar la “Revolución de las conciencias” y la “reconciliación”. A tono con esa idea, y con base en recursos provenientes de donativos, a inicios de 2010, bajo la dirección del periodista Jesús Ramírez Cuevas, se fundó el periódico *Regeneración*, nombrado así en honor de los hermanos Flores Magón, en el primer centenario de la Revolución Mexicana.

Dicho mensuario tenía como fin ser el portavoz del Movimiento, y su nombre el de sintetizar el lustro de trayectoria política recorrido. Además de brindar una visión política diferente a la de los medios tradicionales, *Regeneración* se convirtió en la principal herramienta formativa del Movimiento, que mediante ella hacía frente tanto a la brecha digital como a la ausencia de medios de información en comunidades pequeñas y en sectores escasamente politizados.

De esta manera, luego de cinco años de actividad política accidentada pero consecuente, se llegó a una formalización visible del Movimiento, dejando atrás denominaciones y prioridades fluctuantes, y consolidando un órgano identitario tangible.

A la par, varios intelectuales, también por invitación y coordinación de Ramírez Cuevas (muchos de los cuales participaron en el activismo crítico ante la Reforma energética de Calderón) elaboraron un documento que entrañaba una propuesta política con miras a 2012, llamado *Nuevo proyecto de Nación*, que en lo fundamental instaba a lo siguiente:

1. Gestar una “revolución de las conciencias” que ponderase valores más solidarios y menos individualistas en todos los espacios de la vida colectiva.





2. Rescatar al Estado nacional y ponerlo al servicio de los mexicanos.
3. Democratizar los medios de comunicación.
4. Ponderar una ética republicana y sanear de corrupción las Instituciones.
5. Crear una nueva economía.
6. Combatir los monopolios.
7. Abolir privilegios fiscales.
8. Promover el sector energético como palanca de desarrollo.
9. Rescate del campo.
10. Promoción del Estado de bienestar.

Tanto ese documento, como otro libro de AMLO con tesis coincidentes, llamado *La mafia que se adueñó de México... y el 2012*, se consolidaron en 2010 como declaración explícita de una nueva participación electoral de López Obrador. Esos tres documentos fungieron como preámbulo para la fundación de la Asociación Civil llamada *Movimiento Regeneración Nacional* el 2 de octubre de 2011.

La idea detrás de esa organización era sintetizar los valores enarbolados por el Movimiento liderado por AMLO durante esos años y, al mismo tiempo, prepararse para reactivar la participación electoral en 2012.

En la segunda parte del sexenio calderonista, la violencia parecía haber tocado cada rincón del país. Varios episodios exhibieron la zozobra en que vivía la población: la masacre de más de setenta inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, asesinados por negarse a servir a un cártel; el asesinato de Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia; y el de dos estudiantes del Tec de Monterrey, a quienes las fuerzas de seguridad sembraron armas para hacerlos pasar por delincuentes. Hechos como estos dieron lugar a la creación de "No más sangre", organización que denunciaba el dolor social y exigía un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado.

A la par del nuevo diagnóstico de país, la crisis de seguridad motivaba a que se afrontara la elección de 2012 con un discurso que revalorizara la solidaridad. Mediante una búsqueda de colaboradores entre diversos intelectuales abierta por Ramírez Cuevas, Morena definió sus valores seminales y sus postulados





ideológicos fundacionales mediante el esfuerzo fundacional del intelectual mexicano Luis Javier Garrido.

Académico universitario de renombre, y uno de los politólogos más respetados en el país por sus análisis sobre el Estado mexicano, el PRI y las izquierdas, Garrido había sido un férreo defensor de las causas populares y crítico implacable de la corrupción y el modelo neoliberal en toda su trayectoria pública. A pesar de nunca haber militado en partido alguno, siempre había manifestado su apoyo abierto a diversas movilizaciones y posturas políticas que se opusieran a las viejas estructuras e inercias vetustas del sistema político mexicano.

El investigador universitario, una de las voces más lúcidas de la izquierda mexicana, fue el autor del primer decálogo ideológico de Morena, que, en su opinión, era un Movimiento que había ido recogiendo desde abajo, al margen de las burocracias partidarias, las necesidades y carencias del pueblo mexicano, al mismo tiempo que asimilaba sus "posibilidades y aspiraciones". El Movimiento debía convertirse, entonces, en un cuerpo político que congeniara la búsqueda del poder institucional para la transformación con la movilización social que siguiera alertando y visibilizando, desde una óptica crítica, los problemas desde abajo.



¿TÚ CREES QUE EL CHAPO GUZMÁN, O EL GUÉRO PALMA, O GARCÍA ABREGO PUEBAN DERROTAR AL EJÉRCITO MEXICANO?

ELLOS NO, PERO CALDERÓN SÍ.

La ponderación de Morena debía recaer en las siguientes tesis:

1. La política debe ser una vocación de servicio a la comunidad.
2. El cambio que postula Morena debe ser por la ruta pacífica y democrática.





3. En Morena no hay pensamiento único, sino principios democráticos en torno a una nación plural, con figuras de democracia participativa.
4. Tres fuentes históricas inspiran al movimiento: la Independencia, la Reforma y la Revolución.
5. Morena es plural e incluyente, donde participan personas de todas las clases y credos.
6. Morena se nutre de las luchas sociales de México y se inspira también en las luchas democráticas de América Latina.

Esa era, en esencia, la brújula ideológica de la agrupación. Sin embargo, debía enfrentar desde esa perspectiva problemas prácticos. En el día de su formalización como asociación civil, el simbólico 2 de octubre –conmemorativo de la matanza de Tlatelolco– de 2011, se informó que la organización contaba más de 37 mil comités en todo el país y casi 4 millones de afiliados, que operaban mediante la comunicación cara a cara (recorridos vecinales, difusión de material entre conocidos en sus espacios cotidianos, como familia, oficina, trabajos, escuelas, etcétera) y que actuaba de forma eminentemente voluntaria.

Más allá de su ideario, en el terreno político debían hacer frente a la venidera elección. De ahí que el objetivo principal era hacer de esa estructura ciudadana un frente promotor de la candidatura presidencial de AMLO en 2012, y fundamentalmente un organismo capaz de vigilar las casillas durante la jornada comicial, para evitar un fraude como el acaecido en 2006.

También se dio a conocer una estructura dirigente de Morena a nivel nacional (donde abundaron académicos como René Drucker Colín, Javier Jiménez Espriú o Raquel Sosa, activistas políticos como Luisa Alcalde, Luisa Albores, María Antonieta Laso y ex colaboradores de AMLO en el GDF, como Octavio Romero) y un consejo consultivo, donde destacaron varios personajes de la vida científica e intelectual de México. Ese anuncio, hecho en el Auditorio Nacional el 2 de octubre, formalizaba a Morena como asociación civil, pero dadas sus labores, en los hechos confirmaba su vocación de ser una instancia de formación ideológica que daría prioridad a la movilización electoral. Como un partido político sin oficialidad, que resarciera las carencias de los partidos existentes.





MORENA Y EL 2012: EL CAMINO PARA CONVERTIRSE EN PARTIDO POLÍTICO

En la recta final del sexenio de Felipe Calderón, el Movimiento liderado por AMLO había jugado un papel de una fuerza impugnadora que no solo se oponía a las políticas y proyectos del Gobierno federal por razones ideológicas, sino también apelando a la memoria, debido a la llegada ilegítima del panista a la presidencia, en la cuestionada elección de 2006.

La situación política mexicana en fines de 2011 estaba teñida de sangre. La “Guerra contra el narcotráfico” de Calderón había puesto de relieve no sólo la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad mexicanas –infiltradas o de plano cooptadas por el hampa– sino también el nivel de penetración social que los cárteles tenían en muchas regiones del país.

También mostraron a un gobierno que pareció incurrir en tal ocurrencia con vistas a legitimarse tras una elección viciada, pues en sus propuestas de campaña, salvo algunas vaguedades que apelaban a la “mano dura”, Calderón nunca propuso que el ejército llevase a cabo labores policiales. Instituciones, defensores de derechos humanos y periodistas hicieron público durante todo el sexenio abusos, crímenes y excesos de las fuerzas de seguridad, o cómo se veían plenamente rebasados o mancomunados ante el adversario que supuestamente combatían. Asimismo, investigaciones como las de la periodista Anabel Hernández, exponían que en realidad el Gobierno federal parecía, en los hechos, “sacudir el avispero” mientras en el fondo parecía proteger a uno de los cárteles de las drogas.

Por otro lado, se hizo notar la vulnerabilidad de la soberanía nacional al saber de la injerencia de Washington en esa estrategia belicista, pues entidades como la Marina o la Policía Federal recibían el influjo logístico y operativo del gobierno de Estados Unidos, al que se supeditaban.

Esta estrategia calderonista, que criminalizó a los activistas sociales, permitió abusos y la muerte de inocentes –llamados “daños colaterales”– sin resolver el problema de fondo, y que se limitaba a detener a unos cuantos





capos de los cárteles, sin desentrañar a fondo sus estructuras ni sañar el tejido social, para evitar que más personas optaran por unirse al crimen organizado, dejó más de 120 mil muertos en ese sexenio.

Todo ello se condensó como síntesis de un proceso de deshumanización inédito en nuestro país. El esquema económico imperante, que se introdujo en tiempos del autoritarismo priista, confirmado mediante un fraude electoral de 1988, desembocó –luego del 2006, con otra elección viciada– en una guerra cruenta y destructiva que trastocó gravemente a la sociedad mexicana, pero hizo poco para resolver sus problemas de fondo.

Entre otros hechos, esto dio pie a que AMLO, de cara a la elección de 2012, cambiara de rumbo discursivo. El tono de denuncia sobre “la mafia del poder” (una élite económica y política que empleaba las instituciones públicas para fines privados) no se desvaneció, pero ya no fue el punto central en el discurso del tabasqueño, que ahora resaltaba, para superar la crisis que aquejaba al país, la necesidad fundamental de revalorizar la solidaridad y la educación, en contra de la visión individualista promovida por el neoliberalismo.

Esa idea se concretó con la promoción del concepto de la *República amorosa*, que a la larga se convirtió en un foro público de debate y reflexión, donde participaron diversos académicos, defensores de derechos humanos, intelectuales y especialistas, y cuya tesis central consistía en una renovación educativa donde se ponderaran valores más incluyentes y democráticos tanto en la edu-



cación mexicana como en la ética del servicio público.

Con esa propuesta central, AMLO fue erigido candidato a la presidencia de la república para la elección del 2012. A pesar de sus graves conflictos con la dirigencia perredista, y sus amagues de renunciar al partido (que tenía en Marcelo Ebrard, entonces Jefe de Gobierno, a otro posible abanderado), una encuesta dio mejor posición al tabasqueño, y la dirigencia perredista, carente de liderazgos o aspirantes con posibilidades reales, se sumó a la segunda candidatura presidencial de López Obrador.



La campaña se centró en la idea de regenerar el país a través de valores solidarios, y al mismo tiempo, denunciar los problemas más lacerantes y poco visibilizados de las mayorías, como la migración y la destrucción del medio ambiente con fines extractivistas. Con esas tesis, los comités de Morena trabajando de nuevo en paralelo a las estructuras formales de los partidos, promovían la candidatura del tabasqueño mediante acciones diversas de socialización política.

Sin embargo, la preocupación central de la organización era construir una gran estructura de vigilancia que cubriera el día de la elección el cien por ciento de las casillas, y que en términos ideológicos no solo se ponderara la trayectoria del tabasqueño, sino que alertara sobre los riesgos de la continuidad neoliberal, representada por los aspirantes del PRI (Enrique Peña Nieto) y del PAN (Josefina Vázquez Mota).

Con base en una capacitación apresurada y la búsqueda apremiante entre militantes registrados, Morena buscaba contar con un escudo vigilante de ca-





sillas y promover el voto por AMLO ante el principal adversario, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, privilegiado en las encuestas debido fundamentalmente al manejo mediático y al descomunal gasto propagandístico hecho durante su sexenio para promover su imagen.

López Obrador, a pesar de sus recorridos y activismo, aparecía en un lejano tercer lugar en las preferencias ciudadanas, y su discurso sobre la reconciliación nacional apenas le abonó algunos puntos a su favor. Sin embargo, una fallida presentación de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, donde se enorgulleció de su vocación represora y el PRI hizo un escarnio mentiroso contra los estudiantes que legítimamente lo cuestionaban, detonó la aparición de un movimiento estudiantil emergente, el *Yosoy132*.

Con la exigencia fundamental de democratizar los medios de difusión y de criticar al candidato priista, ese movimiento, surgido a principios de mayo, incidió seriamente en la contienda presidencial, disminuyó las simpatías por Peña y polarizó la contienda entre él y AMLO.

Morena tuvo ciertos canales de entendimiento con el 132, sobre todo cuando este adquirió un cariz más a la izquierda, al dejar de promover solamente el “voto informado”, asumiéndose como simpatizante de movimientos como el de 1968, el CEU o el movimiento zapatista. Las marchas y asambleas organizadas por este movimiento inyectaron simpatías por AMLO, sobre todo entre los jóvenes, muchos de los cuales vieron también en Morena un espacio de militancia.

La elección en julio resultó de nueva cuenta cuestionable. Abundante en prácticas antidemocráticas, como la compra directa de votos y el uso ilegal de recursos públicos (por ejemplo, el descomunal reparto de tarjetas prepagadas de supermercados), la campaña se había llevado a cabo en un clima de marcada inequidad mediática a favor de Peña Nieto y la movilización ilegal de recursos de gobiernos priistas a su favor. Al final el priista se impuso y el resultado oficial relegó a AMLO al segundo lugar.

Morena estuvo muy cerca de lograr su cometido, pues a pesar de ir cuesta arriba en las preferencias, AMLO logró 15 848 827 votos y la vigilancia electoral, si bien no fue del 100%, rebasó el 70% de presencia nacional, muy por encima





de lo que históricamente lograban cubrir los partidos que postularon a AMLO. Dicha vigilancia, a fin de cuentas, fue la que documentó casos de compra de votos y expuso las iniquidades del proceso electoral.

De nuevo se impugnó la elección, y aunque una vez más se puso de relieve la precaria cultura democrática mexicana, donde el PRI y Peña resultaron impunes pese a las múltiples irregularidades cometidas, el TEPJF declaró triunfador al priista. Se cerró así otro proceso electoral en que prevalecieron las prácticas antidemocráticas, y la elección del año 2000, que se había considerado el inicio de otra época para el país, ajena a los fraudes y compras de voto, parecía haber sido más la excepción que una nueva regla de la vida electoral mexicana.

LAS POSTRIMERÍAS DE 2012, LA FUERZA DE MORENA, EL PACTO POR MÉXICO Y LA CONSOLIDACIÓN PARTIDISTA

Un balance del papel del Movimiento mostró contraluces. Morena alegaba tener en la víspera de la elección cinco millones de afiliados, cuya labor era convencer a cinco personas de sufragar por AMLO y así lograr 25 millones de votos que le pudiesen haber dado la victoria, y cubrir a cabalidad la vigilancia de casillas.

No se alcanzaron ese par de objetivos; Morena tuvo deficiencias organizativas y logísticas (como tener una coordinación débil con los partidos que postularon a AMLO y –fundamentalmente– creer erróneamente que cinco millones de afiliados en el papel representan cinco millones de militantes activos para las labores del partido). Tampoco supo prever la compra de voto a favor del PRI ni las muchas irregularidades y trampas que la candidatura de Peña propició el día de la elección.

Sin embargo, la fuerza presencial del movimiento fue muy significativa. Con base en ella, AMLO logró remontar en las encuestas hasta convertirse en un candidato competitivo ante Peña y obtuvo cerca de 16 millones de votos (casi un millón más que en el 2006), mientras que la cobertura de casillas abarcó prácticamente tres cuartas partes del país. Era claro que, más allá de sus





contratiempos logísticos, su inexperiencia política y su premura, Morena había rebasado en capacidad operativa a los tres partidos formales que postularon a AMLO. En sí mismo, el lopezobradorismo fundante de Morena constituía ya una fuerza política emergente en el país.

Luego de la elección, esa fuerza política debatía internamente sobre su propio destino. Los círculos de estudio y los comités de base lo mismo exponían datos y documentos que probaban las acciones ilegítimas del PRI y se preguntaban qué papel habían de jugar ante la asunción de Peña.

AMLO, por su parte, en medio de la impugnación electoral, anunció en septiembre de ese año que “pedía licencia” de los partidos que lo postularon a la presidencia, lo que en los hechos constituía una separación sin estridencia de estos.

Los militantes de Morena, aun en la indecisión poselectoral, exponían ya una pregunta importante: qué tipo de relación habría de tener su organización ante los tres partidos con quienes había cooperado en campaña. La licencia de AMLO del PRD parecía indicar el camino de la separación, pero un hecho contundente terminó por definirlo todo.

Peña Nieto fue resultado de una elección cuestionada debido a las denuncias de compra de voto y de prácticas antidemocráticas fuera de la casilla electoral. Acaso guiado por el antecedente de 2006, en donde Calderón, por razones parecidas, asumió un cargo en medio de una severa crisis política, Peña y el PRI idearon una forma de legitimación previa a la toma de posesión, que consistió en el llamado *Pacto por México*.

Dicho *Pacto* era un acuerdo cupular entre Peña y el PRI con las dirigencias de los demás partidos políticos, en donde se comprometían ciertas reformas económicas y políticas con miras a darle salida a la crisis que vivía el país, agravada por los cuestionamientos electorales de ese año. Sin embargo, dicho paquete de propuestas incluía dos cuestiones sensibles: una reforma constitucional que de nuevo buscaba trastocar la Constitución para privatizar los recursos energéticos, y una reforma educativa.

Se trataba de un compendio de reformas variopinto, donde, sin embargo, primaban postulados privatizadores y laborales ajenos a los principios del PRD.





Para Morena, dicho pacto era una simulación de “consenso” entre partidos, que contenía propuestas privatizadoras de las cuales los partidos jamás hablaron en campaña, por lo que significaba un engaño a los ciudadanos, y, por otro lado, implicaba elementos contrarios a los principios rectores de los partidos, por ejemplo, la modificación del artículo 27 Constitucional, que el PRD debía defender de acuerdo con sus estatutos.

Sin embargo, en noviembre de 2011, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, sorprendió a los propios militantes de su partido al anunciar que el Sol Azteca se sumaría al *Pacto*. Sin consulta a las bases, y trastocando los principios perredistas, optó por continuar la línea abierta en 2008 por Jesús Ortega, quien prefirió olvidar el marco estatutario perredista para negociar con Calderón y ahora Zambrano, cuya corriente había justificado alianzas con el PAN para “contener al PRI”, hacía el mismo papel que su antecesor acercándose al propio Peña Nieto.

En un contrasentido mayor, Zambrano se integró al *Pacto*, lo cual suponía un acercamiento con Peña Nieto *incluso antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diera su veredicto sobre la elección*. Es decir, aun antes de que terminara el proceso de impugnación, el PRD daba la espalda a su propio candidato y se acercaba a su principal adversario. Luego de la elección de 2012, y ante un PRD que se mantenía en una línea colaborativa y no opositora a sus adversarios, ahora sí numerosos militantes del Sol Azteca se distanciaron del partido.

En ese escenario, los comités de Morena redefinieron con más facilidad qué rumbo tomar. Las asambleas poselectorales de la organización definieron una fecha para tomar una decisión: el 20 de noviembre, con delegados de Morena provenientes de todo el país, el partido votaría por qué ruta seguir en el futuro: *convertirse en un partido político o mantenerse como movimiento*.

En las asambleas se decidía a través de votaciones la selección de delegados, y en el terreno político se debatía qué convenía votar. Empero, dos elementos daban fortaleza a la idea de volverse un partido político: la fuerza incipiente, pero significativa, que la organización había mostrado en 2012, tras siete años de activismo político, y, por otro lado, el debilitamiento perredista





como partido opositor, cuya cúpula optaba por acercarse a sus adversarios en vez de defender sus propios principios básicos y parecía imposible recuperarle un papel de opositor.

Morena consignó a sus comisionados y delegados para la elección con base en las personas que habían militado ahí de forma constante, y se definieron los números mínimos de asistentes para que dicha elección fuera representativa de toda la estructura nacional de Morena, organizada por colaboradores de AMLO. Con una asistencia de casi el 70 por ciento de los delegados, por encima del 50 requerido para el quórum, el 20 de noviembre de 2012, y en una jornada singular de discusión política en la que se definían mesas de trabajo y temas prioritarios para la agenda del movimiento independientemente del papel que jugaría en el futuro, los delegados votaron mayoritariamente por hacer de Morena un *partido-movimiento*. Resultó importante esa definición. No se trataría de un partido más, sino que su vena en *movimiento* significaría que, pese a su búsqueda de un registro formal e institucional, la organización habría también de ser correa de transmisión entre el Estado y los movimientos sociales y populares, identificados con ideas afines, críticos del neoliberalismo, ante los cuales no solo trataría de ser interlocutor sino representante. Asimismo, su marco estatutario tenía un objetivo muy claro: definir una serie de criterios que evitaran lo más posible conflictos internos por la selección de dirigentes o candidaturas, buscando evitar lo ocurrido con el PRD, y tratando de dar al partido un cariz más democrático (como considerar al sorteo y a la encuesta como formas de selección de candidatos).

Del mismo modo, ahí Morena definió sus secretarías, que en los hechos significaban una declaración de principios, pues ponderaban la agenda liberal y la vocación social al construir secretarías como la de Diversidad Sexual, Derechos Humanos, Secretaría de Mujeres, entre otras que dejaban ver sus ponderaciones y prioridades.

En esa misma fecha, los delegados nacionales y estatales, a través de mecanismos de propuesta libre y auto-propuesta, eligieron a la primera dirigencia nacional de la organización y a sus dirigencias locales, con el objetivo inmediato de organizar la movilización y convocatoria para poder cumplir los requisitos





fundamentales de la ley electoral mexicana lo más pronto posible, y para dicha labor se señaló el mes de septiembre de 2013 como fecha de inicio.

En el conjunto de los delegados y dirigentes electos podían encontrarse ciudadanos que se habían sumado al movimiento en alguna de sus facetas o etapas previas: experredistas y ex panistas; activistas que habían realizado promoción electoral a favor de AMLO, o participado en las acciones de resistencia pacífica poselectoral en 2006, o contra la reforma energética de 2008, así como participantes en los espacios de socialización política del movimiento, entre otros. La primera dirigencia nacional de Morena, elegida ese noviembre de 2012, mostraba con claridad esa realidad, pues en ella había experredistas críticos de Jesús Ortega, colaboradores de AMLO durante su Jefatura de Gobierno, o activistas identificados con AMLO desde el desafuero, debutantes en política formal, que fueron también un fuerte componente de las dirigencias estatales y locales de Morena en todo el país.

Aunque no comenzaba su operación en el vacío –debido a su presencia considerable en casi todo el país–, Morena debía afrontar el reto formidable de lograr 32 asambleas estatales de al menos tres mil simpatizantes cada una, que se registrarían ante el escrutinio oficial del Instituto Nacional Electoral.

El esfuerzo de la militancia fue sobresaliente. En un plazo muy corto, de apenas tres meses y con pocos contratiempos, Morena logró su cometido en diciembre de 2013, cuando ante la égida del INE realizó su última asamblea fundacional en la Ciudad de México, en la cual lograron una convocatoria récord de más de once mil asistentes. Sorteados los requisitos técnicos, que el INE evaluó, y analizó los números, firmas y lineamientos de Morena, el 9 de julio de 2014 obtuvo su registro formal como partido político nacional.

El Movimiento coronaba así una década de movilizaciones, de socialización política, de activismo, en la que, al tiempo que enfrentó a un gobierno emanado de una elección turbia, supo construirse una identidad ideológica independiente, a raíz de diversas coyunturas y a pesar de su cercanía o distancia con otras formaciones políticas, a través de un proceso accidentado a lo largo del cual el Movimiento nunca renunció a la vía electoral para buscar transformar la realidad mexicana.





En ese sentido, el registro de Morena ante el INE no significó la culminación de un proyecto acabado, predefinido con precisión, sino más bien el resultado de una estrategia flexible de apropiación de los mecanismos institucionales, con miras a la transición hacia otra etapa de una misma historia; una historia nacida al fragor de la lucha contra una jugarreta autoritaria y que –en el fondo– propugna en favor de un cambio reformista en México.

CONCLUSIONES: LA RAÍZ FUNDACIONAL DE MORENA

A lo largo de este texto se ha tratado de brindar un compendio de antecedentes para dar un panorama retrospectivo sobre Morena. En ellos van implícitas sus proclamas fundamentales, su diagnóstico de país, sus demandas principales, su liderazgo, sus causas. En síntesis, su razón de ser.

Sin embargo, no debe olvidarse que, muchas veces en la historia, origen es destino. Morena es un partido que se define a sí como *movimiento* y que ello significa, de acuerdo con la militancia fundadora, estar obligado a mantener una interlocución y conexión permanente con las demandas progresistas de la sociedad movilizada.

Ese origen tiene, como cualquier formación social, ventajas y desventajas. En un contexto como el mexicano, donde la corrupción de sus funcionarios parece ser la constante, un político que se erigió como excepción a esa regla fue construyendo sobre esa base un liderazgo preeminente, que lo tornó referente de un cierto tipo de oposición al giro neoliberal mexicano de los años ochenta.

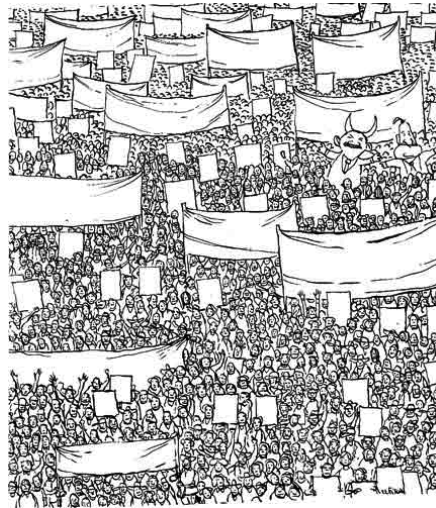
Morena surgió de un grupo social, apartidista pero politizado, al fragor de diversos episodios de nuestra historia reciente, que sostuvo como exigencia originaria evitar que se enturbiara el proceso democratizador mexicano con un desafuero autoritario.

En suma, su génesis es una lucha netamente democrática, que se extendió a tratar de sanear una elección de Estado en 2006 y que en el sexenio de Calderón se fue forjando una identidad a partir de su impugnación.





Ese sexenio, ilegítimo a los ojos de ese movimiento, fue el contexto para construir su entramado ideológico, primero mediante la defensa de la herencia cardenista en el sector energético mexicano y luego recopilando a ras de suelo las carencias fundamentales de las mayorías mexicanas, exacerbadas luego de tres décadas de aplicación del modelo neoliberal.



En el plano de la política real, el Movimiento tuvo una relación cambiante de cercanía y cooperación con el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, donde la pérdida de brújula ideológica de este último, y una dirigencia proclive a negociar principios, resultaron no una determinante, pero sí un incentivo severo para construir una formación propia, cuando fue notorio que era imposible recuperar el control de ciertos espacios del partido.

Antes de esta crisis del PRD, ya había una fuerte cauda militante y más o menos organizada en el Movimiento, que se había dado a sí misma una estructura e identidad significativas desde 2005.

Asimismo, ese Movimiento, sin transigir sus principios básicos, ejerció una impugnación constante ante gobiernos emanados de procesos cuestionables y ante las cúpulas del PRI y del PAN, sin que eso significara rechazar en su seno militantes de base o líderes de esos partidos, desplazados por múltiples razones –desde las convicciones hasta el oportunismo y el cálculo personal– en tanto se alinearan a los objetivos del Movimiento.

De ahí que las vertientes ideológicas de Morena sean diversas, como lo son en la actualidad todos los partidos que aspiran a ser competitivos en un contexto democrático. Morena no tiene un solo sector de clase o social. Busca simpatías en todos los ámbitos de la sociedad (como hacen hoy todos los partidos





que buscan ser competitivos electoralmente). Sin embargo, *el común denominador de esos sectores está en la reticencia ante el modelo neoliberal y en la tendencia a recuperar, en mayor o menor medida, la función social del Estado, su rectoría en sectores estratégicos como la energía, así como profundizar derechos sociales, como si se tratara de un núcleo ideológico que hunde raíces en el nacionalismo revolucionario consagrado en la Constitución de 1917, pero que va más allá, enriquecido con exigencias diversas de la izquierda social, como la agenda de libertades sexuales y derechos humanos.* Su brújula ideológica nace al fragor de la movilización. *Su mayor activo está en sus militantes de base y fundadores, personas diversas (donde las mujeres han jugado un papel fundamental, como en el caso de la lucha energética) que, a través del voluntariado y convicciones, hicieron el trabajo de base, de afiliación y de consolidación del partido.* Aun con la recepción pragmática de candidatos provenientes de otros partidos, es en ese afluente donde Morena encuentra lo mejor de sí y en donde, en el plano de la política real, hallará el mejor muro de contención a la reproducción de prácticas caducas en su interior, como el clientelismo o las trampas antidemocráticas.

A diferencia de los partidos emergentes en México, el principal reto de Morena no es la supervivencia electoral, que ha superado con creces. Su principal desafío estriba en su institucionalización, en la difusión de una identidad y principios en sus militantes que haga efectiva una vida interna vigorosa, que genere más liderazgos sin depender de ninguno y que también concrete sus reglas básicas para la rotación de cargos y reparto de candidaturas en su seno, para evitar las taras que llevaron a otros partidos, como el PRD, a la decadencia y degradación absolutas.

Para contribuir a esa labor, basta que Morena recuerde su origen: una lucha firme e institucional, digna y valerosa, en las calles, a favor de la democracia y en contra de un acto autoritario. Ese credo puede y debe ser –al mismo tiempo– su génesis y su camino a la madurez. 🌀





SEMBLANZA: HÉCTOR ALEJANDRO QUINTANAR



Héctor Alejandro Quintanar (Escandón, Ciudad de México, 1985) es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se ha desempeñado como profesor desde 2010.

Es colaborador en las obras colectivas *El marco conceptual para la enseñanza de la comunicación política*, coordinado por Carola García y Fernando Martínez Elorriaga; *Política, comunicación y ética. Deslegitimación del Estado mexicano*, coordinado por Leonardo Figueiras Tapia. Es autor del libro *Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional* (Ítaca, 2017). Asimismo, se ha desempeñado como articulista en diversos medios de circulación nacional y como asesor en campañas políticas.

Desde 2017 es doctorante en Estudios latinoamericanos y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa.







El origen del Movimiento de Regeneración Nacional se terminó de imprimir en los talleres gráficos XXX, en la Ciudad de México, durante el mes de octubre de 2019.

**Distribución gratuita.
Queda prohibida su venta.**

Se tiraron 2000 ejemplares



